

IBEROAMÉRICA

Por JOSÉ SÁNCHEZ MÉNDEZ

El año 1998 puede considerarse generalmente positivo para Iberoamérica, si bien los excelentes resultados, en datos macro económicos, hayan sido inferiores a los alcanzados en 1997. Pero la mayoría de los habitantes de la región considera sin embargo que el futuro no es nada alentador, al menos eso es lo que se desprende de una gigantesca encuesta efectuada por Corporación Latinobarómetro, entidad sin ánimo de lucro con sede en Santiago de Chile, que inició sus actividades con ayuda de la Unión Europea. Más de 17.500 entrevistas en 17 naciones de la zona, (con alguna ausencia notoria, como la de Cuba) han permitido obtener una buena radiografía del subcontinente, toda vez que es la tercera vez consecutiva que se ha realizado esfuerzo tan señalado. Desde el Río Grande hasta la Tierra de Fuego a los ciudadanos iberoamericanos la situación les parece preocupante, pues el 77 por ciento cree que su país está en decadencia o estancado. Cabe por consiguiente preguntarse si las instituciones iberoamericanas son lo suficientemente fuertes y estables para soportar una desilusión cada vez más notoria, si bien cuentan todavía con los respaldos de la mayoría, con una media del 63 por ciento en México y Suramérica y de un 66 por ciento en Centroamérica. Pero los habitantes de la región expresan su desencanto con el funcionamiento del sistema democrático, con el cual un 65 por ciento no se encuentra nada satisfecho, excepto en Uruguay y Costa Rica, naciones con destacadas tradiciones de participación ciudadana, donde un 60 por ciento de la población está de acuerdo con el desarrollo de la democracia.

Quizás sea a ello a lo que se debe una creciente actitud de los ciudadanos en favor de gobiernos autoritarios, incluso en países donde se venía prestando un apoyo formal a los usos democráticos, tal como es el caso de México, donde en tan sólo un año los partidarios del autoritarismo han superado el 30 por ciento de la población, creciendo ocho puntos en relación con el año anterior. Pero este avance del autoritarismo va unido a la creencia generalizada de que sus gobiernos cada vez mandan menos, cayendo del 60 al 48 por ciento, con referencia al año anterior, la opinión de que el Gobierno era la institución que disponía de mayor poder. Así mismo, ha disminuido en cinco puntos la creencia de que las multinacionales y las grandes empresas sean otra gran fuente de poder, al descender al 44 por ciento. ¿Quiénes han aumentado su influencia o poder en el continente? Hay opinión unánime en la región de que son los partidos políticos y los militares, aunque en Centroamérica la ciudadanía ha percibido una pérdida de influencia de las Fuerzas Armadas (del 28 al 18 por ciento), como consecuencia de cierta normalización democrática, debido a los devastadores conflictos bélicos ocurridos en la década pasada.

ASPECTOS POLÍTICOS

Para James Petras, sociólogo y profesor de la universidad neoyorquina de Binghamton, dos de los principios básicos de la transición a la democracia en Iberoamérica, la alternancia y que los partidos gobernantes no pudieran utilizar los recursos del Estado para perpetuarse en el poder, se encuentran hoy día gravemente amenazados. En su opinión, si bien el principio de la alternancia política persiste, ha perdido gran parte de su significado para muchos electores, que han mostrado su creciente desinterés y absentismo electoral, motivado por la incapacidad de los partidos y dirigentes políticos para implantar procedimientos que realmente aseguren el cumplimiento de las reglas del juego democrático por parte de todos durante las campañas electorales y eviten que, aunque cambien los partidos y los líderes en el poder, se lleve a cabo la misma política.

Según Petras, la segunda amenaza es la reaparición del continuismo, si bien lo ha hecho dentro del marco electoral y no en el contexto de un régimen militar. Desde siempre, en Iberoamérica se ha mantenido el criterio de que los abusos del Estado contribúan a la formación de una cultura política autoritaria, no sólo en la perpetuidad de la concentración de poder personal sino en el institucional de las Fuerzas Armadas, con la reducción de posibles candidatos a la sucesión. Para el conocido sociólogo la exis-

tencia de determinados intereses facilitaba la corrupción política, por lo que era necesario eliminar una de las claves del *continuismo*, la reelección presidencial. Sin embargo, varios gobiernos han iniciado reformas constitucionales para perpetuarse en el poder con recursos e influencias estatales y asegura Petras que más de la mitad de la población iberoamericana vive en la actualidad bajo *regímenes continuistas*. Concluye el profesor diciendo que ello supone desviarse considerablemente de las normas y prácticas de la democracia y que dichos regímenes autoritarios de carácter civil han nacido en un principio en circunstancias de abierta competencia política y con el objetivo o excusa de garantizar que no volvería a imponerse en el país un régimen militar, pero que sus semejanzas en forma y contenido con el pasado hacen inútiles los esfuerzos para marcar una clara ruptura con el mismo, por lo que de hecho facilita un retorno a la militarización de la política, de la mano del nuevo autoritarismo electoral.

En su edición del "*Strategic Survey*" de 1998, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres expresa la convicción que en Iberoamérica, los militares, si bien han regresado a sus cuarteles, no han renunciado a influir u obtener el poder, aunque sea para ello utilizando el juego democrático establecido. Cita como ejemplo la designación del general Hugo Banzer como presidente de Bolivia en mayo de 1997, realizada dentro de unas limpias elecciones, pero que permitieron al antiguo dictador recuperar el poder y participar nuevamente en la vida política del país. Tras enumerar otros casos similares de diversos militares en diferentes repúblicas iberoamericanas, el IISS advierte que antiguos y actuales oficiales de las Fuerzas Armadas están emergiendo no solamente como aspirantes al poder presidencial sino también actuando en la sombra, como elementos muy influyentes en gobiernos civiles elegidos democráticamente. Argumenta el caso del general Augusto Pinochet, quien tras su abandono en marzo de 1998 como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Chile, por su nombramiento como senador vitalicio de acuerdo con las previsiones constitucionales de 1980, elaboradas durante su presidencia, puede participar e influir sobre los presupuestos económicos y otras importantes decisiones políticas.

El citado instituto londinense continua afirmando el caso de otros militares que intentan asumir cuotas notables de poder, pero por caminos menos constitucionales, y toma como referencia el de las Fuerzas Armadas mexicanas, al incrementar su influencia y adquirir mayor protagonismo en la lucha contra las guerrillas zapatistas y los cinco grandes cárteles de la droga cada vez mas poderosos en la vida del país. Cita así mismo el

caso de Colombia, donde el Ejército ha alcanzado un influyente poder a nivel regional y local, con la excusa de combatir a la guerrilla, los narcotraficantes y los escuadrones paramilitares, y añade a la lista a Ecuador, donde considera a las Fuerzas Armadas como una de las instituciones más populares del país, prestigio adquirido por su papel modernizador cuando los buenos años de los ingresos del petróleo en la década de los 70. El IISS menciona también a Perú, en el que Alberto Fujimori se apoya en los militares para fortalecer su posición, sobre todo a partir de la operación de rescate de los rehenes capturados por la guerrilla en la embajada japonesa, acción realizada en abril de 1997. El IISS finaliza su análisis insistiendo que en Iberoamérica la amenaza a la estabilidad democrática no procederá en el futuro de golpes militares sino de oficiales capaces y deseosos de llenar vacíos de poder institucional, social y político en una región con cierta estabilidad democrática e índices notables de crecimiento económico, pero también gravemente afectada por la escalada del crimen organizado, muy vinculado a su vez al narcotráfico y el fermento no erradicado de la guerrilla, particularmente en Colombia, México y Perú.

A comienzos de septiembre de 1998 se celebró en Panamá la XII Cumbre de jefes de Estado y de gobierno de las catorce naciones integrantes del Grupo de Río, a la que no asistieron los primeros mandatarios de Argentina, Brasil y Uruguay, debido, entre otras razones de índole doméstica, a los graves reveses sufridos por sus economías durante la crisis internacional del verano de 1998. En la actualidad, este grupo está integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, más dos países que, con carácter rotatorio, representan a Centroamérica y el Caribe. En la Cumbre, los cuatro socios del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) más Perú condicionaron la incorporación al Grupo de Río como miembros de pleno derecho de los demás países centroamericanos y caribeños que la habían solicitado a una discusión a fondo sobre la oportunidad, conveniencia y características de esta ampliación. Como razón principal adujeron que la suma de miembros a la agrupación nacida en 1986, supondría la creación de una nueva Organización de Estados Americanos, aunque sin Estados Unidos y Canadá. En mi opinión, esta actitud es un craso error porque si Iberoamérica debe y tiene que hacerse oír con fuerza y sin tutela ni presiones ante los dos poderosos vecinos de Norteamérica, ha de hacerlo en bloque y con una sola voz, al igual que la Unión Europea. En Ciudad de Panamá, Iberoamérica demostró el avance en la consolidación

de los procesos democráticos, pero también retrasos en la puesta a punto de mecanismos capaces de generar confianza y amortiguar las consecuencias de la crisis económica surgida en el verano de 1998. Una deuda externa de 640.000 millones de dólares consume una gran parte del ahorro interno, influye en los presupuestos, programas de desarrollo y en el combate contra la pobreza y el paro. En Panamá, el Grupo de Río instó al Fondo Monetario Internacional a un mayor control multilateral del flujo de capitales especuladores que volatiza capitales y castiga a los más débiles.

LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA

Violencia urbana, guerrilla, confrontación indígena, narcotráfico y diferencias fronterizas continúan siendo los más graves problemas que dañan la estabilidad del subcontinente iberoamericano.

Violencia Política

En la 39 Asamblea Anual de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebrada en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias del 12 al 18 de marzo de 1998, se advirtió que la *violencia política* alcanza unos niveles muy superiores a los de la tasa media mundial, que se traduce en un profundo impacto en la vida social y económica de la región. En el informe sobre "Epidemiología económica de la violencia urbana", elaborado por el economista Juan Luis Londoño para el BID, se señala que anualmente hay en la región unos 140.000 homicidios, que cada iberoamericano pierde al año una media de tres días de trabajo a causa de la violencia y que 28 millones de familias sufren un robo o un hurto cada año, estimando que la violencia es en Iberoamérica cinco veces más alta que la que se produce en el resto del mundo. La violencia tiene enormes costes económicos pues la destrucción de bienes equivale a un 14,2 por ciento del producto interior bruto regional y en capital humano se pierde el 1,9 por ciento del PIB iberoamericano, equivalente al gasto total en la enseñanza primaria, llegando a perderse el 4,8 por ciento del PIB en recursos de capital. En opinión de diversos expertos del Banco Interamericano de Desarrollo, la oleada de violencia evita que la economía iberoamericana crezca entre dos y tres puntos más respecto al PIB cada año. Pocos son los que discrepan de este coste, si bien los especialistas, los *violentólogos*, no coinciden en las causas y posibles soluciones del problema pues, mientras Londoño y el BID lo achacan a la falta de educación,

posesión de armas y consumo de drogas y de alcohol, otros economistas, entre ellos el peruano Adolfo Figueroa, consideran que el único factor causante es la pobreza y la desigualdad social.

La guerrilla

Como comentábamos el año pasado en la edición de Panorama Estratégico 1997-1998, la desaparición del bloque socialista dejó a la *guerrilla* sin ideología ni modelo social, por lo que su mensaje se vió reducido y perdió su credibilidad. Por otro lado, los largos años de clandestinidad llevaron a cierta profesionalización del guerrillero, que ha convertido las llamadas vacunas o impuesto revolucionario, el secuestro y su participación en el narcotráfico en una forma de vida cómoda y rentable que no está dispuesto a abandonar tan fácilmente, razón por la cual gran parte de los grupos revolucionarios iberoamericanos se resisten a desaparecer tras el final de la “guerra fría”. A su vez, la *guerrilla* se ha convertido en reemplazo o sustitución del Estado en muchas regiones, principalmente en lo que se refiere a servicios sociales y asistenciales, por lo que la Autoridad del Estado ha desaparecido en amplias regiones de varios países iberoamericanos.

Al mismo tiempo, como advierte el conocido politólogo Román Ortiz, la continuada acción guerrillera, junto a la incapacidad de las Fuerzas Armadas respectivas para neutralizar sus actividades y frenar su extensión, ha llevado consigo la proliferación de grupos paramilitares, pasando estos últimos de ser grupos de extremistas a convertirse en auténticos ejércitos privados y señala que entre los factores más importantes de autoalimentación de la *guerrilla* están la pobreza y la fragilidad del Estado. En opinión del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el uruguayo Enrique Iglesias, la incidencia de la pobreza y sus niveles absolutos continúan siendo más altos que en 1980, golpeando de manera especialmente fuerte a las zonas rurales. Por ello, sostiene Iglesias, corregir esa situación a través de una mayor estabilidad social y política y un mayor crecimiento económico constituye el gran desafío de la región para el comienzo del siglo XXI, toda vez que en la actualidad la pobreza crea un clima sociopolítico extremadamente tenso, al proporcionar una masa de desposeídos dispuestos a unirse a movimientos armados de distinto signo. Igualmente, en numerosas ocasiones los gobiernos no pueden garantizar el funcionamiento de determinados servicios básicos tales como la seguridad pública o la administración de justicia, amén de otras prestaciones, como la de la seguridad social. Prueba palpable de ello, asegura Román Ortiz, es que el

90 por ciento de los delitos que afectan a la seguridad ciudadana quedan impunes en los distritos periféricos de ciudades como Bogotá, Lima, México o Caracas. Esta fragilidad de la Administración, en concreto la de la justicia, crea las condiciones necesarias para que prolifere la violencia, pues la falta de autoridad del Estado crea un vacío que grupos guerrilleros o paramilitares tienden a ocupar. También, en muchas ocasiones, la guerrilla sustituye a la Administración en la realización de determinadas funciones, pasando a ser la base social que todo grupo armado necesita para sobrevivir. A todos estos factores hay que sumar la complicada geografía del subcontinente, que dificulta la cohesión del Estado, ya que los recursos nacionales no pueden superar las dificultades naturales que presentan selvas, grandes ríos, orografía imposible o desiertos.

Un aspecto muy notable a considerar es la compleja relación entre la guerrilla y la población indígena, en la que se entremezclan las fuerzas de seguridad y, como veremos más adelante, los narcotraficantes. Los grupos guerrilleros suelen operar en las regiones más remotas, en medio de las fronteras internacionales, justo las que habitan los indios, ya que son los mejores lugares para evadir al Estado, realizar acciones ofensivas y posteriormente cruzar la frontera. Como consecuencia, al compartir el terreno con la guerrilla, y a veces con los narcotraficantes, en particular en Colombia, Guatemala y Perú, deben luchar por mantener un difícil equilibrio con los diversos grupos armados de la región. Por otro lado, los gobiernos nacionales pretenden identificar, dentro del cuerpo social, aquellos grupos vulnerables a la influencia subversiva y las comunidades indígenas suelen ser señaladas como uno de estos grupos.

Desde el comienzo de la guerrilla, los indios han luchado en Colombia por independizarse del FARC, el M-19, el ELN y otras formaciones guerrilleras rurales, intentando evitar la infiltración de los insurgentes y verse forzados a prestarles su apoyo, mientras desde el otro bando las fuerzas de seguridad acusaban a los indios de connivencia con la guerrilla. En Perú, los indígenas se encontraron entre dos fuegos, por una parte las tropas peruanas y por la otra a Sendero Luminoso, siendo millares los asesinados, asumiendo cada lado que los que se titulaban campesinos neutrales apoyaban a la otra parte, hasta que los militares peruanos cambiaron la actitud al comprobar la falsedad de sus afirmaciones. Millares de ashininka se vieron forzados a unirse a Sendero Luminoso o facilitarles un apoyo económico, que incluía en ocasiones la producción de hoja de coca, y si bien en los comienzos de la década de los 90 consiguieron expulsar de su territorio al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), hacerlo con

Sendero Luminoso parece algo imposible. En opinión de la socióloga peruana María Isabel Remy, las comunidades indígenas resisten cada vez con más fuerza la dominación e intimidación de Sendero Luminoso, aliándose poco a poco con los militares.

Las Fuerzas Armadas guatemaltecas consideraron en un principio que una gran parte del pueblo maya constituía un apoyo para los antiguos guerrilleros que hoy militan en el partido político URNG o Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca. La URNG no es un movimiento indígena y su ideología no contempla las reivindicaciones políticas y sociales de los mayas, pero la represión de los indios por los militares llevó a millares de ellos a unirse a dicha Unidad Revolucionaria. Pequeños grupos armados desgajados del movimiento Katanista de origen indígena dieron pie en Bolivia a que las fuerzas de seguridad iniciasen una seria ofensiva para erradicarlos, ante el temor de que fuesen penetrados por Sendero Luminoso, aunque según el antropólogo Xavier Albó, dichos grupos, si bien utilizaban lemas y nombres indígenas para atraer el apoyo campesino, nunca han estado integrados por los indios bolivianos. Similar situación vivió en Ecuador la guerrilla Puka Anti, en quechúa Sol Rojo, violentamente reprimida por el ejército, que consideraba estaba influida igualmente por Sendero Luminoso, pero en la cual nunca militaron indígenas, toda vez que su base la integraba la población estudiantil de Guayaquil.

Para la indigenista Donna Lee Van Cott, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) representa una anomalía tanto entre los grupos guerrilleros como en los movimientos indígenas en Iberoamérica, por las circunstancias que dieron lugar a su nacimiento y posteriormente a su transformación, la extraña mezcla de sus integrantes y apoyos y el conjunto de demandas étnicas culturales e izquierdistas de base nacionalistas. Según Van Cott, el EZLN mexicano surgió por la fusión de dos grupos; uno compuesto por intelectuales de ideología maoísta, no originarios de Chiapas ni indígenas, y antiguos miembros de organizaciones guerrilleras izquierdistas de México, pero que posteriormente se trasladaron cerca de Chiapas; el segundo lo formaban un pequeño grupo de activistas indígenas que se disgregó del movimiento indio pacifista de Chiapas y que huyeron a la selva Lacandón. La terrible bajada de los precios del café en el mercado internacional, a principios de los 90, que arrastró a la quiebra a muchas cooperativas campesinas, junto con la suspensión de los subsidios estatales, fomentó el descontento entre los indios del Estado. De la fusión de ambos grupos nacería una organización con la estructura, la estrategia y los símbolos militares que conjugaban la ideología de un movi-

miento marxista armado y ciertas características indígenas, entre las que están: demandas básicas de los indígenas pacíficos de Chiapas, la llamada a la dignidad, la autodeterminación, el respeto por la cultura e identidad indígena y con un significativo número de afiliados mayas, muchos de los cuales solamente conocen los idiomas indios. Pero aunque el movimiento indianista y el EZLN son incompatibles, hoy por hoy van de la mano a fin de obtener beneficios mutuos.

CONFRONTACIÓN INDÍGENA

La *confrontación indígena* con el Estado en los últimos años ha agravado la frustración de los indios que pretenden formular sus reclamaciones políticas. Altercados violentos importantes han ocurrido recientemente en Bolivia, Ecuador y México, como expresión del desafío de las comunidades indígenas a la autoridad estatal, debido a las continuadas violaciones de sus derechos territoriales y humanos. Mientras que en algunas naciones iberoamericanas han logrado el reconocimiento y protección mediante reformas legales y constitucionales, continúan siendo desproporcionadamente los más pobres de los pobres y víctimas frecuentes de innumerables abusos.

En una conferencia pronunciada en la National Defense University norteamericana, Donna Lee Van Cott decía que una mejor comprensión de los conceptos de Seguridad y Defensa, desde el punto de vista de las comunidades indígenas, nos ayudaría a valorar con mayor rigor cómo las políticas nacionales desempeñan un papel que puede agravar o ayudar a la solución del conflicto interétnico en Iberoamérica. Aunque desde las perspectivas nacionales, las relaciones indígenas-Estado difieren notablemente dentro de la región, sin embargo los aspectos relativos a la Seguridad Nacional son coincidentes en términos generales, defensa de la soberanía nacional e integridad territorial y lucha contra el narcotráfico y los movimientos armados. Pero el significado Seguridad Nacional es diferente para las comunidades indígenas, gobiernos o fuerzas armadas, lo cual incide notablemente en sus relaciones recíprocas.

Los pueblos indígenas se consideran a sí mismos como naciones y su concepto de *Seguridad nacional* va unido intrínsecamente a su supervivencia. Además de la seguridad física —defensa frente a la coacción y violencia del exterior— pugnan por proteger su seguridad cultural como instrumento de conservar a la nación indígena como una entidad social,

territorial y política. La diversidad étnica y cultural de los 40 millones de seres humanos que componen las decenas de grupos indígenas diversos existentes en Iberoamérica representa una barrera, a veces infranqueable, para su integración, toda vez que prefieren conservar una forma propia de ver el mundo —ni mejor ni peor, simplemente distinta— y ajena al concepto de desarrollo de la sociedad industrial. Debemos aceptar que la precaria economía de subsistencia de las comunidades que los rodean, las enfermedades que su sistema inmunológico no está preparado para combatir, junto a las formas de vida occidental, no son factores ni circunstancias que permitan romper su aislamiento voluntario como forma de mantener su propia identidad. Los indígenas no conocen el concepto de fronteras ni de propiedad y para ellos el aspecto de seguridad más importante es, además de retener las tierras que han dominado por generaciones, mantener el derecho a regirlas como bienes comunales. La tierra no es simplemente un recurso económico para los indios, es también garantía de gobierno autóctono y de autonomía, la base de la comunidad indígena como organización social, el instrumento por el que transmiten a sus descendientes su cultura y su identidad. En un durísimo comunicado publicado el 13 de enero de 1998, la Iglesia católica denunciaba a las empresas petrolíferas y madereras que expropiaban las tierras de los indios, muchas veces “con complicidad de los poderes públicos”. Según el Vaticano, los indígenas son considerados “inversores de sus propias tierras” y “despojados de ellas y de su cultura” y, contra lo habitual, apuntaba directamente a los responsables: “la élite terrateniente y las grandes empresas de explotación de los recursos madereros y mineros”. Estas multinacionales, decía el Vaticano, “no han tenido reparo en instaurar un clima de terror, con métodos intimidatorios, detenciones ilegales y hasta reclutando a grupos armados para deshacerse de aquéllos que defienden a los más débiles”.

Las amenazas directas a la posesión, invasiones o incursiones por sus territorios en busca de caza y tierras cultivables, talas de árboles próximos, perforaciones petrolíferas o traficantes de drogas suelen ser rechazadas con graves enfrentamientos en los que normalmente llevan la peor parte. Cuando se han organizado como grupos armados casi siempre lo han hecho para defenderse de los intentos violentos de expulsarlos de sus tierras ancestrales o para enfrentarse a políticas de los gobiernos de anular sus derechos territoriales previamente amparados por leyes anteriores. Es necesario contemplar la propiedad de la tierra desde la óptica de los pueblos indígenas, que recientemente quieren proyectarse como nacionalidades, exigiendo el derecho de autonomía protegido por la ley internacional.

Comprender sus aspiraciones, sus tradiciones y sus valores culturales es totalmente imprescindible para valorar hasta qué nivel de violencia podría llegar la confrontación indígena en el futuro y qué garantías podría ofrecer para funcionar como etnia y grupo social autónomo. Como resultado de continuos y largos encuentros entre líderes indígenas y antropólogos habidos durante la década de los setenta, surgió en Iberoamérica una corriente indianista de carácter intelectual, dirigida a potenciar los valores culturales de las civilizaciones indias, en base a sentar las diferencias entre su concepto de sociedad y el del resto de los pueblos del continente. El indianismo pretende la autonomía política, el respeto a su sistema económico y a sus autoridades tradicionales, en especial en los territorios que consideran como propios. Nace como antítesis del indigenismo, concepto estatal destinado a su integración en la cultura occidental, a través de una aparente protección de sus derechos. A su vez, se opone el marxismo revolucionario por considerar este que el enfrentamiento del indianismo al Estado no obedece a la diferencia cultural. Igualmente es conveniente distinguir las diversas corrientes y tendencias políticas entre los distintos grupos indígenas y también la manera en la que los cambios sociales habidos en los países iberoamericanos junto a las diferencias ideológicas han afectado a los pueblos indios. La protección de su idioma, cultura, autonomía y de sus tierras son factores que afectan a la seguridad del subcontinente, pero por otro lado hay que profundizar en las complejas relaciones entre los indígenas, fuerzas armadas, guerrilla, paramilitares y narcotraficantes.

Igualmente son muy graves las repercusiones sobre las poblaciones indígenas iberoamericanas del control de los recursos naturales en algunos países del hemisferio, debiendo resaltarse los efectos de la política brasileña sobre la Amazonia. En esta región se concentra el 90 por ciento de la población indígena de Brasil, estimada entre 250.000 a 300.000 habitantes e integrada por 200 grupos étnicos separados que hablan 170 lenguas y dialectos, siendo los grupos más numerosos los guaraníes, tikunas, yanomanis, makusis, y kayapós, mientras que el 77 por ciento restante de los indios pertenece a grupos étnicos de menos de 1000 individuos. Cerca de 110 lenguas cuentan con menos de 400 parlantes. Por mucho tiempo Brasil ha mantenido una fuerte presencia militar en la Amazonia para proteger sus fronteras y controlar la explotación de sus recursos minerales y madereros, lo que a veces ha originado la movilización de diversas agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales para evitar la deforestación tropical, tanto por las grandes talas de arbolado como por la quema de grandes extensiones para la cría de ganado y la agricultura

comercial. Así mismo se han movilizado para proteger a los indígenas y sus territorios de las predaciones ilegales y de los buscadores de oro o *garimpeiros* y de otros aventureros que invaden con plena impunidad las tierras indígenas. Hay que entender que dos de los grupos indígenas más importantes, los yanomani y los macuxi, que habitan a lo largo de las fronteras de Venezuela y Guyana, sean una preocupación, para los militares brasileños ante el temor de que se unan a sus vecinos, con los que tienen vínculos étnicos, para intentar constituir una nación india independiente. No es de extrañar pues que una de las directrices de la Política de Defensa Nacional brasileña, aprobada por el presidente de la nación en 1996, exprese: "*proteger a Amazônia brasileira, com o apoio de toda a sociedade e com a valorização da presença militar*". Sin embargo, ello no debe ser un serio obstáculo para comprender y respetar la actitud de estos pueblos, que solamente piden se reconozcan sus derechos y vivir en paz y libertad dentro de unos territorios que consideran como propios desde muchos siglos atrás y que su contacto con la civilización occidental ha hecho, de acuerdo con cifras recientes del gobierno brasileño, que 130.000 indígenas puedan hallarse infectados por el virus del sida. Entre otras regiones muy conflictivas pueden citarse la cabecera del río de Las Piedras, en Perú, habitada por los mashco-piro y amenazada por la compañía Móbil, y la región colombiana de los u'wa, que niegan la entrada en su territorio a la Compañía Petrolera Occidental y han amenazado al gobierno con el suicidio colectivo, mientras que en Ecuador los tagaeri se oponen, con sus vidas, a cualquier tipo de contacto.

Podemos inferir que los gobiernos deben ser más sensibles y comprensivos con los problemas de los indígenas y aprovechar el clima de cooperación regional actualmente existente para promover el diálogo, ante el impacto que las políticas nacionales de orden social, económico y cultural tendrán sobre los indios y en los que el derecho a la posesión de sus tierras jugará un papel fundamental. De esta forma, se contribuirá a la estabilidad política y a la Seguridad Nacional del continente.

EL NARCOTRÁFICO

Es cierto que el *narcotráfico* ha crecido y se ha desarrollado en naciones dotadas de gobiernos débiles, pero también otros factores económicos y sociales, tales como la pobreza, la incultura y falta de educación han tenido una importancia esencial en su expansión.

Pero no mucho menos importantes fueron el derrumbamiento de los

precios agrícolas a nivel mundial y las reformas neoliberales que eliminaron el apoyo del Estado a la agricultura campesina durante las dos últimas décadas. Millares de campesinos se ganan ahora la vida en Iberoamérica cultivando marihuana, la amapola y la hoja de coca, como única alternativa posible para subsistir. El cultivo representa para los agricultores una ganancia neta de 4 a 34 veces la del cacao o maíz, los productos agrícolas alternos. Valga como ejemplo una reciente información publicada por *"The Economist"*, según la cual, mientras una hectárea de tierra cultivable con cacao produce una cosecha valorada en unos 400 dólares, otra de la misma tierra dedicada a la plantación de coca puede superar los 10.000 dólares. Por ello, los compradores van directamente a los agricultores, eliminándoles así el problema de tener que transportar el producto hacia el mercado por carreteras estrechas, de difícil trazado y con firmes deteriorados, y además muchos narcotraficantes pagan al contado y por adelantado. De esta forma, los campesinos están a merced de la mayoría de los traficantes de droga del subcontinente, a veces de acuerdo con elementos paramilitares y con la propia policía y que junto a los vínculos entre la guerrilla y el narcotráfico vienen a complicar aún más la mezcla de intereses en la zona. Sirva como muestra que Sendero Luminoso ha escogido las regiones altas del valle peruano de Huallaga como objetivo estratégico para controlar la producción de coca de la región, por otro lado ideal para su cultivo, protegiendo a los 300.000 agricultores de las operaciones antidrogas del gobierno de Fujimori y cobrándoles altas sumas a los traficantes de drogas por cada vuelo para entrar en la zona y recoger los cargamentos, tal como asegura David Scott Palmer en *"Journal of Interamerican Studies and World Affairs"*.

Situaciones de este tipo producen en muchas ocasiones acciones violentas de las Fuerzas Armadas y medios policiales contra los indios, no como expresión de discriminación sino por el hecho de que, en el caso de los países de la región andina, la mayoría de los cultivadores de amapola, coca y marihuana son indígenas. Aún cuando no están involucrados en calidad de cultivadores, son igualmente objetivo de la violencia de los paramilitares y de los cárteles de la droga, porque se ven envueltos en enfrentamientos en tierras que ocupa el cártel, sea legal o ilegalmente, razón por la cual estas disputas sobre las tierras son el origen principal de los violentos altercados entre los indios y los que no lo son. La etnicidad no es la causa inicial de esta violencia relacionada con la droga, porque es importante imaginar una solución al problema: los gobiernos deben comprender los factores culturales que están involucrados en la violencia con-

tra los indígenas por sus lazos no deseados con el mercado de la droga. Algunos países han resaltado la conveniencia de cultivar productos agrícolas alternos en la lucha contra la droga, postura en abierta confrontación con la de Estados Unidos, que se inclina por la erradicación. Es cierto que se ha producido una notable caída de los precios de la hoja de coca, debido entre otras causas al aumento del consumo de las drogas de diseño, pero el tráfico de drogas sigue siendo decisivo, no solamente para la economía doméstica o la pequeña economía rural sino también para las economías nacionales, en particular las de la región andina. En Colombia, por ejemplo, el narcotráfico proporciona a la economía nacional cerca del 6 por ciento del producto interior bruto, de acuerdo con el último *Informe Anual del Observatorio Geopolítico de Drogas*, lo cual ha venido a trastocar la estructura productora del país. Para Kevin Healy, los grupos de traficantes en estupefacientes más ricos y fuertes, y no los agricultores, son el obstáculo principal al tratar de erradicarles, y cita el caso de Bolivia, donde el comercio de la droga representa el 75 por ciento de las exportaciones legales del país, lo que supone una incidencia en su economía mayor que en la de Colombia o Perú. Healy calcula alrededor de 500.000 los campesinos indígenas que están involucrados en el comercio de la coca, dándose el caso en Bolivia de que los cultivadores de la coca, donde es legal cosechar su hoja con fines medicinales, están representados por un sindicato bien organizado y militante, el ANAPCOCA o Asociación Nacional de Productores de Coca. En tanto que el aprovechamiento agrícola alternativo es aparentemente la única opción de liberar a los cultivadores de coca de su dependencia del mercado de la droga, la selva colombiana de Chaparare, donde se cosecha la mayoría de la hoja de la coca y a donde los campesinos de todo el país han emigrado en busca de tierras agrícolas, es una selva tropical impropia para la agricultura clásica y comercial. Por la escasez de oportunidades en otras partes del país para las más de 800.000 familias que viven en el Chaparare, no es probable que la situación cambie en el futuro cercano.

Pero el narcotráfico tiene otra influencia, no menos importante, en la vida de muchas de las naciones iberoamericanas y en su capacidad de corrupción, que llega a afectar con una increíble facilidad a sectores importantes de la organización del Estado, incluidos altos cargos responsables de la lucha antidroga. De esta manera, la mafia del narcotráfico ha corrompido a políticos, mandos de las Fuerzas Armadas responsables de los órganos policiales o magistrados, con unos niveles tan peligrosos que ha llevado a que esta lacra se haya convertido en una de las más graves

amenazas a la estabilidad y seguridad en Iberoamérica. En esta línea de penetración, el narcotráfico ha sabido evolucionar para hacer frente a la lucha antidroga, en concreto fragmentándose en bandas o grupos independientes de los grandes cárteles y procesando su propia cocaína en base a nuevas tecnologías, lo que ha venido a dificultar aún más su desarticulación.

Los importantes recursos económicos que genera el narcotráfico permiten a sus promotores ofrecer a bandas armadas grandes sumas de dinero a cambio de protección, lo que ha hecho que ciertos grupos guerrilleros y paramilitares se hayan introducido en el mercado de la droga. Esto quiere decir que debe profundizarse en los vínculos entre narcotraficantes, paramilitares y guerrilla para llegar a conocer sus conexiones políticas y sociales, que impiden la estabilidad interna de una gran parte de los países iberoamericanos, por lo que la represión del mercado de la droga es natural que resulte poco atractiva para los miembros de las Fuerzas Armadas, en particular en unos momentos en los que en algunos países se discute todavía cual debe ser el papel de los militares en una sociedad democrática y su subordinación a las autoridades civiles. El Ejército desea mantener su papel legal y constitucional, la defensa y la seguridad exterior de la nación, pero puesto que el narcotráfico se está convirtiendo ya en una amenaza global al conjunto iberoamericano, desde Colombia, Perú a México y extendiéndose a Brasil, Argentina o Venezuela, es natural que igualmente se plantee sus ámbitos de actuación en la lucha antidroga. ¿Qué beneficios podrían obtener las Fuerzas Armadas en este campo? En principio parece deducirse que sus presupuestos podrían verse aumentados, en unos años en los que han sufrido recortes dramáticos, a fin de ser equipados con las últimas innovaciones tecnológicas y que su personal pudiera mantener de esta forma una completa actividad.

Sin embargo, los militares consideran que más allá de estas o de otras posibles ventajas, existen serios inconvenientes y riesgos, entre los que los más graves son la posible corrupción y el verse obligados a intervenir en el mantenimiento del orden público, lo que podría conducirles a reasumir un cierto papel represivo, felizmente ya superado con la llegada de la democracia. Quizás, el cometido de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la droga podría ser exclusivamente de apoyo operativo y logístico a las Fuerzas de Seguridad, con misiones de inteligencia, vigilancia del narcotráfico, adiestramiento en la contraguerrilla, análisis y estudio del material que se capture, control de fronteras y traducción de documentos incautados o de las grabaciones de las escuchas e intervención de las telecomu-

nicaciones, si bien habría que delimitar con claridad las fronteras entre vigilancia e inteligencia sobre el tráfico de drogas y otras materias relacionadas con asuntos internos de carácter político y social.

En la llamada Declaración de Guayaquil, firmada tras la clausura del X Consejo Presidencial Andino, el 5 de abril de 1998, los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela expresaron que la lucha contra el narcotráfico es uno de los espacios de cooperación en la región que, con sus diferencias en cada nación, afecta a todos por igual. El documento señala que la lucha antidroga debe realizarse mediante acciones de carácter multilateral y no a través de iniciativas unilaterales que puedan afectar las relaciones entre los estados. Así mismo, destaca que "la lucha contra la producción, tráfico, distribución, uso indebido de las sustancias sicotrópicas y delitos relacionados" debe realizarse de conformidad con los principios del derecho internacional y con el pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial.

No es de extrañar, por consiguiente, que exista una fuerte división entre los políticos y militares iberoamericanos ante este complejo problema y ante el cual la posición norteamericana resulta difícil y contradictoria, ya que mientras presionan a las Fuerzas Armadas a involucrarse en la represión del narcotráfico, por otro lado pretenden comprometerlas con la democracia y la defensa de los derechos humanos. Pero una de las principales aspiraciones de las naciones iberoamericanas en la lucha contra la droga, el fin de la certificación unilateral de los Estados Unidos, fue alcanzada en la II Cumbre de las Américas celebrada a mediados de abril de 1998 en Santiago de Chile, acordándose que en lo sucesivo corresponderá a la Comisión Interamericana para el Control y Abuso de las Drogas, CICAD, establecer un proceso único de evaluación gubernamental y de carácter multilateral, para seguir el progreso individual y colectivo de los países participantes en las cumbres en el tratamiento del problema. En Santiago se acordó también crear en Panamá un centro multinacional anti-droga, conforme al plan de Washington de establecerlo en la Base Aérea de Howard, en la Zona del Canal, en el que podrían recibir instrucción los militares iberoamericanos e igualmente mandos y agentes policiales, bajo autoridad norteamericana. Este plan estadounidense, sin embargo, está dirigido a conservar su posición estratégica en el Canal y al mismo tiempo poder efectuar vuelos de reconocimiento sin necesidad de reabastecer a los aviones en el aire. El dilema continúa, mientras tanto, ante una amenaza cada vez más creciente y con un carácter de dimensiones ya hemisféricas.

LAS DISPUTAS FRONTERIZAS

Aunque con cierta lentitud, las naciones iberoamericanas continuaron en 1998 haciendo notables progresos en la solución de los contenciosos fronterizos, culpables en gran medida de la carrera armamentística que había venido padeciendo la región en las últimas décadas. El más grave de estos conflictos es el que venía enfrentando a Ecuador y Perú por la disputa de una franja fronteriza de 68 kilómetros en torno al río Zenepa, que permanecía por deslindar. El momento más delicado ocurrió en enero de 1995, cuando se produjo un enfrentamiento armado que pudo detenerse gracias a la mediación de los cuatro países garantes del Protocolo de Río, que desplegó una Misión de Observadores Militares en Ecuador y Perú (MOMEPE), integrada por representantes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Cuando estalló la guerra ente Ecuador y Perú, en 1995, la remota posibilidad de un conflicto armado entre dos naciones iberoamericanas se convirtió ese año en una triste y amarga realidad, sobre todo para los millares de indígenas que vivían a ambos lados de la frontera, quienes soportaron el impacto de meses de violentos combates entre las fuerzas armadas de los dos países, siendo el más grave el que afectó a la comunidad shuar, que se vió obligada a evacuar de la zona a más de 8.000 habitantes. A mediados de agosto de 1998, las conversaciones fueron progresando, para lo cual Ecuador había retirado sus demandas territoriales y Perú aceptado que no hubiera veto por parte de ambos contendientes a las propuestas de los mediadores, que en opinión de Bruce St. John, autor del libro *"La Política Exterior de Perú"*, constituirán la mejor oportunidad para conseguir una solución permanente, sin necesidad de que ninguno de los dos países se pudiera ver abocado a un absurdo e innecesario rearme. De todas formas, la solución al conflicto no se presentaba fácil, pues la zona en disputa es rica en recursos petrolíferos, por lo que fue utilizada en la década de los 80 por los militares ecuatorianos como fuente de obtención de divisas. En la actualidad, oficiales ecuatorianos retirados, según asegura Donna Lee Van Cott, son dueños de grandes extensiones de terreno en el Amazonas y se han beneficiado de la producción de petróleo, razón por la cual se ha producido una gran militarización en esta región, que posee una fuerte densidad de población indígena. Durante el pasado verano, ambas naciones fueron desactivando cada una de las siete bases fronterizas asentadas en dicho sector de la Cordillera del Cóndor, así como la separación de fuerzas de la zona de litigio, bajo la vigilancia de la MOMEPE. Posteriormente, a principios de septiembre, los presidentes Fujimori y Mahuad celebraron

en la ciudad de Panamá, con motivo de la XII Cumbre del Grupo de Río, una larga reunión con el fin de acelerar el proceso de paz y anunciaron una próxima reunión en Brasilia bajo la coordinación del presidente brasileño Henrique Cardoso, en un intento de encontrar una solución definitiva del diferendo. Ambas partes se comprometieron a una inversión binacional de carácter social y en infraestructuras en la zona por un montante de 3.000 millones de dólares. Como consecuencia del encuentro mantenido en la capital de Brasil, el 16 de octubre los parlamentos peruano y ecuatoriano aprobaron por amplia mayoría la propuesta de línea fronteriza acordada por los cuatro países garantes, Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, con lo que se ha eliminado uno de los contenciosos más graves y difíciles en Iberoamérica. Unas semanas más tarde, el 26 de octubre, los presidentes ecuatoriano, Jamil Mahuad, y peruano, Alberto Fujimori firmaron en Río de Janeiro el acuerdo de paz que pondría punto final a 170 años de disputas, 56 años de negociaciones y tres enfrentamientos armados entre ambas partes. El acuerdo de paz fue suscrito ante los presidentes de Argentina, Brasil, y de Chile y de un representante del presidente de los EEUU por ser los cuatro países garantes del tratado y de dos invitados de excepción, los Reyes de España, a quienes el presidente Carlos Henrique Cardoso calificó como "el mayor símbolo de la admirable herencia iberoamericana". También asistió al acto el cardenal prefecto de la Congregación del Clero, emisario especial de SS Juan Pablo II. En virtud del acuerdo de paz, que se denominará Acta de Brasilia, se reconoce la soberanía de Perú sobre la zona de litigio (una franja de 220 kilómetros de extensión, alrededor de 78 kilómetros de frontera), situada en plena Amazonia, y Ecuador tendrá soberanía sobre una superficie de un kilómetro cuadrado, donde se erigirá un monumento en memoria de los soldados muertos durante el conflicto.

Colombia y Venezuela continúan manteniendo diferencias sobre los límites de las aguas territoriales en el Golfo de Venezuela, principalmente porque la zona posee grandes reservas petrolíferas, y si hasta la fecha no ha llegado a adquirir la gravedad del enfrentamiento ecuatoriano-peruano se ha debido a que mantienen contactos regulares donde se estudia una solución satisfactoria. Por otro lado, la política de armamentos de Colombia está dirigida principalmente a la compra de helicópteros que le permita hacer frente con éxito a la guerrilla y narcotraficantes, más que a la adquisición de avanzados y costosos aviones de combate o de modernos medios acorazados. Sin embargo, a veces se producen situaciones tensas entre ambas naciones, debido a que en sus acciones de persecución con-

tra los grupos guerrilleros y narcos se ven cuasi forzados a penetrar en territorio venezolano.

Paralelamente, Venezuela mantiene sus reivindicaciones territoriales ante Guayana sobre toda la región al oeste del río Essequivo, pero sin el carácter intimidatorio de los últimos años, mientras que Nicaragua discute y porfía con Colombia por la posesión del archipiélago de San Andrés.

Clive Shofield, director adjunto de la Unidad de Investigación de Fronteras Internacionales de la Universidad británica de Durham, considera que hay pocas probabilidades de que todas estas disputas desemboquen en conflictos armados y cita como ejemplo los deseos bolivianos de obtener una salida al Pacífico, como consecuencia de la pérdida de la región de Atacama por la derrota sufrida ante Chile en 1884. Para encontrar un compromiso que pueda satisfacer a las partes, las dos naciones han establecido una comisión bilateral permanente que estudie la manera cómo las mercancías y el comercio boliviano podrían circular a través de territorio chileno hasta la costa, si bien las autoridades chilenas mantienen el criterio de que esa franja está y estará siempre bajo su control y soberanía, pues como dice Schofield, de no ser así sería como si "México exigiese ahora la devolución de California". Otra muestra de la desactivación de un conflicto potencial es el contencioso entre Argentina y Chile, que merced a las discusiones y negociaciones habidas está permitiendo que se llegue a un feliz desenlace. En opinión del analista Patrice Franko, experto en temas iberoamericanos del College Colby, del estado norteamericano de Maine, antes del advenimiento de la democracia había entre Chile y Argentina 28 disputas fronterizas distintas; ahora solo queda una sobre una franja de 13 kilómetros entre ambas partes. Aunque ninguno de los dos parlamentos nacionales ha aprobado todavía el arreglo sobre este último tema, el analista pone de relieve la buena voluntad de ambos gobiernos para reducir la tensión y pacificar el Cono Sur.

Argentina, por su parte, mantiene las reivindicaciones territoriales sobre las islas Malvinas, las Sandwich del Sur y la de Georgia del Sur, pero tras el conflicto armado que mantuvo con Gran Bretaña ha decidido solicitar la devolución ante los organismos internacionales y los cauces diplomáticos, renunciando al empleo de la fuerza. Quedan algunas otras diferencias pero de orden menor, aunque los sectores más nacionalistas de vez en cuando pretenden alimentar la tensión, como son algunas pretensiones de Bolivia, Chile, y Perú en pequeñas zonas fronterizas o los viejos recelos entre Bolivia y Paraguay, si bien estos últimos obedecen más a fantasmas

de la Guerra del Chaco de los años treinta que a reivindicaciones reales. Podría decirse que estos contenciosos y disputas fronterizas, que han amenazado seriamente a la paz y la seguridad de Iberoamérica, continúan siendo factores que pudieran poner en peligro la estabilidad de la zona, pero conforme van apareciendo foros de consulta y negociación y estableciéndose alianzas económicas intrarregionales es de esperar que las posibles crisis que pudieran surgir sean reconducidas hacia soluciones pacíficas.

NO SE HA PRODUCIDO LA ANUNCIADA CARRERA DE ARMAMENTOS

A principios de julio de 1998, fuentes del Departamento de Estado norteamericano confirmaban que, a pesar de los vaticinios de analistas especializados, no había indicaciones que vinieran a confirmar que en Iberoamérica se hubiese producido una carrera de armamentos, después del levantamiento decretado por Bill Clinton en el verano de 1997 del embargo establecido por el presidente Carter veinte años antes.

Voces internacionales muy autorizadas se habían manifestado en contra de dicho levantamiento, temerosas de que el rearme de la región significase un aumento de la pobreza y el deterioro de la calidad de vida de sus habitantes. Entre tales voces estaba la del expresidente de Costa Rica y Premio Nóbel de la Paz de 1987, Oscar Arias, que ha dedicado una gran parte de su actividad pública a promover un código ético internacional sobre la venta de armamentos y quien, junto a otras personas e instituciones laureadas con el Premio Nóbel de la Paz, expuso en Nueva York en 1996 los contenidos de dicho código, con la esperanza de que sea asumido por las Naciones Unidas.

En 1998, Oscar Arias reafirmaba su posición en un artículo que recogía el diario español "El Mundo", y advertía que, aunque Iberoamérica ha sido la región que más se ha desarmado tras finalizar la Guerra Fría, ello no significaba que debería ser utilizado como argumento para adquirir armas de avanzada tecnología susceptibles de desatar una onerosa carrera armamentística. El político costarricense había propuesto el año anterior, en la ciudad norteamericana de Atlanta, una moratoria de dos años para la compra de modernos sistemas de armas, tiempo que debería ser aprovechado para negociar un tratado que comprometiese a los gobiernos de la región a proscribir permanentemente ese tipo de armas en

sus territorios. Así mismo, se quejaba de que todavía existían en el subcontinente arsenales y contingentes exagerados e innecesarios y cuyo mantenimiento son una lamentable desviación de recursos que podrían ser destinados a la satisfacción de otras necesidades más básicas y acusaba a las transferencias de armamentos de ser fuente de corrupción y de firmas de contratos influidos por la presión política de los países vendedores.

En un informe presentado al Congreso de los Estados Unidos el 25 de junio de 1998, el Departamento de Estado manifestaba que solamente algunos países iberoamericanos estaban efectuando la modernización de sistemas de armas prácticamente obsoletos y en muy pocos casos su sustitución "*less than one-for-one*", sin que ello significase un incremento en la entidad de la fuerza. El informe proseguía afirmando que el gasto de armamentos en la región continuaba siendo el más bajo del mundo.

La publicación estadounidense especializada en política y temas de armamento y de carácter semanal "*Defense News*", en un "dossier" sobre la defensa en Iberoamérica publicado en la primavera de 1998, confirmaba la desaceleración en la adquisición de nuevos sistemas de armas de moderna tecnología. Dicho semanario citaba como ejemplo de sus aseveraciones la retirada del servicio del portaaviones argentino "*Veinticinco de Mayo*", sin que hubiese ningún plan para su sustitución, por lo que sus aviones "*Dassault Super Etendard*" tendrán que operar desde bases terrestres. La evolución del esfuerzo de defensa se expone en el cuadro de la página siguiente, donde pueden observarse las cifras que existían en 1985 y en el presente año 1998. Hay dos excepciones notables, Brasil y Colombia: mientras el primero se sitúa a la cabeza en términos relativos y absolutos en el aumento del gasto, la segunda se ha visto forzada por la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico. Cuatro naciones tienen ligeros incrementos, Ecuador (debido al conflicto que mantenía con Perú), Chile, México y Venezuela, mientras que el descenso es más notable en Argentina, Cuba, El Salvador, Honduras y Nicaragua. La evolución puede observarse con mayor fiabilidad si observamos los porcentajes del PIB, debido al crecimiento económico habido en los últimos años.

Las naciones iberoamericanas habían sido receptoras de armamento estadounidense de segunda mano y anticuado desde el final de la II Guerra Mundial, y como consecuencia del embargo del presidente Carter se vieron obligadas a modernizar y actualizar dicho armamento o a recurrir a suministradores europeos e incluso a Israel. Tales circunstancias se dieron

EL ESFUERZO DE DEFENSA EN IBEROAMÉRICA

	<u>Presupuestos de Defensa (precios constantes)</u>						<u>Fuerzas Armadas (miles)</u>	
	<u>Totales (miles dólares)</u>		<u>Per capita</u>		<u>% del PIB</u>		<u>1985</u>	<u>1998</u>
	<u>1985</u>	<u>1998</u>	<u>1985</u>	<u>1998</u>	<u>1985</u>	<u>1998</u>		
Cuba	2.275	700	225	62	9.6	3.2	162	55
R. Dominicana	75	72	11	9	1.1	1.0	22.2	24.5
Costa Rica	40	70	16	19	0.7	0.8	(param.)	8.4
El Salvador	360	90	75	15	4.4	1.0	41.7	24.6
Guatemala	168	140	21	12	1.8	1.1	31.7	31.4
Honduras	195	35	23	5	5.1	0.8	16.6	18.3
Nicaragua	315	30	96	6	17.4	1.2	62.9	17.0
Panamá	130	125	59	44	1.8	1.4	(param.)	11.8
Argentina	5.160	3.500	169	99	3.8	1.1	108.0	73.0
Bolivia	180	185	28	21	2.0	2.0	27.6	33.5
Brasil	3.350	14.200	25	84	0.8	2.4	276.0	313.25
Colombia	605	2.700	21	74	1.6	3.5	66.2	146.3
Chile	1.770	2.100	147	142	3.8	2.7	101.0	94.3
Ecuador	405	575	43	46	1.8	2.8	42.5	57.1
México	1.770	2.300	22	24	0.7	0.9	129.1	175.0
Paraguay	85	110	23	20	1.3	1.2	14.4	20.2
Perú	915	840	49	34	2.5	1.4	128.0	125.0
Uruguay	340	325	113	100	2.5	2.4	31.9	25.6
Venezuela	1.175	1.300	68	56	2.1	1.8	49.0	79.0

principalmente en las Fuerzas Aéreas, donde la de Argentina se ha visto obligada a conformarse con la modernización de 36 "A-4" procedentes de los excedentes de la Navy norteamericana, mientras que Brasil y Chile estudian programas de rejuvenecimiento de sus aviones "F-5E/F". Por otro lado, la venta de aviones de combate franceses, realizada a partir de 1977, ha llevado consigo que igualmente se lleve a cabo la modernización de distintos tipos de aviones "Mirage" en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, sumándose a esta política de actualización los "Mig-29" y "Sukhoi" adquiridos por la Fuerza Aérea peruana. Solamente pudiera haber una excepción, en lo que se refiere a la adquisición de sistemas de armas aéreos más modernos, y es el caso de Chile y Ecuador. En el primero, la retirada del servicio de los viejos 39 "Hawker Hunter" iniciales obliga a la Fuerza Aérea chilena a su sustitución, estando la duda

en la compra de tan solo 12 aviones de segunda mano "F-16" o "F-18" norteamericanos, "Mirage 2000" franceses o "Jas-39 Gripen" suecos, tal como se desprendía de la exhibición realizada por dichos aviones en la Feria Internacional del Aire y del Espacio Chilena, (FIDAE), de 1998. Sin embargo, en el mes de junio el Gobierno chileno canceló el proyecto de sustitución. En el segundo caso, el enfrentamiento militar con Perú en 1995 puede llevar a Ecuador a potenciar su arsenal aéreo, posiblemente con "Mig-29". Igualmente, las Marinas de los países iberoamericanos, que tradicionalmente habían sido dotadas con viejos cruceros, destructores y submarinos norteamericanos, buscaron su sustitución a finales de la década de los 80 y comienzos de los 90 en los astilleros europeos, principalmente alemanes e italianos, así como en los franceses y españoles. Pero hoy día ya no se conforman con barcos de segunda mano, si bien los recursos presupuestarios son reducidos: pretenden adquirir un número inferior de buques pero más modernos y capaces, y cuando se trata de Argentina, Brasil, y Chile, que la compra incluya compensaciones industriales y la transferencia de nuevas tecnologías.

Para muchos comentaristas el levantamiento del embargo norteamericano tiene segundas lecturas: el excedente sin salidas de sus reservas de armamento como consecuencia de la desaparición de la Guerra Fría, más recientemente, la crisis asiática que ha frenado la compra de armamentos en estos países, y el avance de la industria de la defensa europea en un mercado tradicionalmente estadounidense. Sin embargo, la actual situación económica de la región no permite vaticinar gastos extraordinarios para modernizar y potenciar las Fuerzas Armadas, excepto en aquellas naciones que precisan de sistemas capaces de contrarrestar las nuevas tecnologías de los narcotraficantes, pero en ningún caso debe suponer el inicio de una carrera de armamentos.

ASPECTOS ECONÓMICO-SOCIALES

En el informe anual la 39 Asamblea Anual de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo celebrada en marzo de 1998, y ya citada anteriormente, se recogía con gran satisfacción que Iberoamérica había registrado en 1997 un gran crecimiento económico y menos desempleo. El crecimiento económico de la región se elevó al 5.2 por ciento, tasa que se sitúa en segundo lugar entre las más altas desde 1980, debido en gran medida al rápido crecimiento habido en Argentina y México, que actuaron como grandes motores y donde el Producto Interior Bruto real aumentó un

7.8 y un 7.1 por ciento respectivamente. También registró un vigoroso crecimiento la República Dominicana, que llegó al 7 por ciento, al igual que Perú. En Brasil se pasó del 3 por ciento de 1996 al 3.5 por ciento, como consecuencia de las medidas monetarias y crediticias adoptadas por las autoridades para evitar una intensificación de los desequilibrios internos. El crecimiento aumentó en 10 países, superó el 4 por ciento en 14, aunque no llegó al 3 por ciento en Costa Rica. Por su lado, la temida "gripe asiática", no provocó más que una leve recaída en la zona.

Como consecuencia de la recuperación económica, el informe del BID dice que el desempleo bajó en Iberoamérica por primera vez desde 1988, con una disminución notable en Argentina, donde descendió del 18 por ciento habido durante la recesión de 1995 a menos del 14 por ciento en el segundo semestre de 1997. En el mismo período, el paro disminuyó en México del 6.3 al 3.2 por ciento, mientras que otros siete países registran descensos, aunque de menor cuantía.

Las inversiones reales registraron un crecimiento firme en la mayor parte de la región, de más del 10 por ciento de promedio, resaltándose que Argentina con un 26 por ciento, y Ecuador, México y la República Dominicana, que llegaron al 20 por ciento. A su vez las exportaciones también registraron un gran dinamismo, con un aumento alrededor del 10 por ciento a precios constantes y de un 12 por ciento en dólares. Como consecuencia de la expansión de la actividad económica y de la demanda, las importaciones también crecieron de forma rápida, lo que motivó un aumento del déficit por cuenta corriente de la región. A su vez, la inflación continuó descendiendo en 1997, hasta el punto que el promedio bajó al 11 por ciento, habiendo sido todavía alta en Venezuela, un 35 por ciento. Hubo también una tendencia inflacionista en República Dominicana y Ecuador, donde en este último país fue superior al 10 por ciento.

Esta favorable coyuntura económica, sin embargo, no será igual en 1998, pues los más optimistas se conformarían con que el crecimiento medio en Iberoamérica pudiera estar entre el 2.5 y el 3 por ciento. Las causas de ese descenso, señala el economista jefe del BID Ricardo Hausmann, son la "gripe asiática" o "efecto sake", la crisis del rublo, la caída del precio de materias básicas para la región (petróleo, pulpa, papel, cobre, ...) y una posible lentificación de la economía a nivel mundial. En este sentido, hay que tener presente que el precio de las materias primas supone un 2.6 por ciento del PIB para Brasil, un 17.6 para Chile, el 19.1 para Ecuador y un 21.9 por ciento para Venezuela. De todas formas, comenta Hausmann,

la tormenta debe ser pasajera, pues las perspectivas económicas de la región hay que considerarlas a largo plazo. En este sentido, dice, el aumento de las inversiones, la persistencia de una posición fiscal relativamente disciplinada, la continuación de reformas estructurales y la reciente disminución del desempleo deben ser motivos de optimismo. En este punto, el presidente del BID, Enrique Iglesias, ha recordado que lo primero e imprescindible es lograr un consenso entre los políticos y la sociedad, y luego acompañar las reformas económicas con reformas laborales, invertir más en capital humano e incrementar la productividad del trabajador y su remuneración, perfeccionar los sistemas de seguridad social, adoptar medidas de apoyo especiales para la mujer y las comunidades indígenas y potenciar la pequeña y mediana empresa, y sobre todo combatir la desigualdad social, la pobreza y la violencia.

En 1994, la crisis económica de México, también conocida como "efecto-tequila" arrastró la tasa de crecimiento del PIB iberoamericano del 5.7 por ciento al 0.8 por ciento en 1995, razón por la cual se teme ahora con mayor razón que la debilidad de las economías asiáticas, en particular la japonesa y la situación del rublo, pudieran tener una consecuencia más negativa aún que lo que se venía suponiendo en un principio. Las medidas que puedan adoptarse para contrarrestar o mitigar sus efectos vendrán a perjudicar, como siempre, a las clases sociales más desfavorecidas, como se están ya notando las aplicadas a finales de 1997 ante el comienzo de la crisis asiática, para evitar la fuga de capitales, como fueron la elevación de tipos de interés y mayores restricciones fiscales. Como advierte la vicepresidenta del BID, Nancy Birdsall, debe establecerse una tasa sobre los movimientos de capitales a corto plazo para prevenir la repetición de la fuga de capitales que se ha producido en Iberoamérica en esta década, lo cual inevitablemente traerá consecuencias negativas para el crecimiento y para los objetivos sociales de la región.

Pero a finales de agosto de 1998, la crisis económica que atraviesa Japón, junto a la de los países emergentes asiáticos, el empeoramiento de la situación en Indonesia y sobre todo el derrumbamiento del rublo provocó unas fuertes bajadas de los mercados bursátiles mundiales, que se vieron acentuadas en los mercados iberoamericanos al dispararse los rumores de posibles devaluaciones en cascada de las monedas venezolana, brasileña, mexicana e incluso la de Chile, lo cual ha venido a confirmar aún más la globalidad de la economía. Exceptuando México, el resto de los países del área mantiene regímenes cambiarios ligados al dólar, lo que puede dar lugar a bruscas devaluaciones, ofreciendo importantes riesgos a los inver-

sores y grandes oportunidades a los especuladores. Por ello, el director gerente del Fondo Monetario Internacional, FMI, Michel Camdessus, convocó a los ministros de Economía de las nueve repúblicas iberoamericanas más importantes el 3 de septiembre en Washington para analizar la situación en la región y obtener del organismo multilateral respaldo para recobrar la confianza internacional de sus economías. Tras dos días de conversaciones de los directivos del FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo, y del Banco Mundial, con los ministros de Economía de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela, las autoridades financieras y monetarias internacionales respaldaron las reformas estructurales realizadas por dichos países, expresaron su confianza en que estos continuarán registrando un crecimiento positivo y bajas tasas de inflación y pidieron a los mercados financieros mundiales que diferencien claramente la crisis en los países asiáticos y en Rusia de la situación actual en Iberoamérica. A pesar de ello, las agencias internacionales de calificación de crédito revisaron, durante la reunión, a la baja la calificación de Argentina, Brasil, México y Venezuela, lo que motivó que los ministros de Economía de estas naciones criticasen duramente a dichas organizaciones acusándolas de actuar contra las economías y Bancos de Iberoamérica, recordando que los principales estados de la región cuentan con sólidos fundamentos macroeconómicos y con reservas internacionales en máximos históricos para defender sus divisas. Sin embargo, las consecuencias del desbarajuste ruso-asiático han hecho su efecto, tal como afirmó el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para Iberoamérica (Cepal), José Antonio Ocampo, que ha previsto una disminución del crecimiento económico de la región para 1998, estimando que estará entre el 2 y el 3 por ciento, cuando tales valores debían situarse alrededor del 7 u 8 por ciento si se quiere afianzar un crecimiento sostenido. Las previsiones de crecimiento hasta fin de 1998, según *The Economist Intelligence Unit*, favorecen en primer término a Argentina, con un aumento entre el 4.6 y el 5.1 por ciento, seguida de Chile, con una horquilla entre el 4.1 y el 5.1, y de México, con el 4.3. Entre los países que forman parte de los distintos bloques económicos (Pacto Andino, Mercosur y Mercado Centroamericano), la renta per cápita más alta la tiene también Argentina con 6.910 dólares y la más baja Bolivia con 911. Argentina, sin embargo, va a la cabeza del crecimiento del número de pobres, lo cual es confirmado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que refleja para Argentina un incremento en los últimos años del porcentaje de miseria, con una subida del 7 al 19 por ciento, seguida de Perú, que pasó del 26 al 34 y de Paraguay que superó el 53 por ciento para llegar al 60 por ciento.

LA ECONOMÍA IBEROAMERICANA (fuente FMI)

	<u>PIB</u>		<u>IPC</u>	
	<u>1997</u>	<u>1998</u>	<u>1997</u>	<u>1998</u>
Argentina	8.6	5.0	0.8	1.3
Brasil	3.2	1.5	7.9	5.0
Chile	7.1	4.5	6.1	5.4
Colombia	3.1	2.7	18.5	19.5
Rep. Dominicana	8.1	6.0	8.3	5.0
Ecuador	3.4	1.5	30.6	33.6
Guatemala	4.1	4.5	9.2	6.5
México	7.0	4.5	20.6	15.3
Perú	7.2	3.0	8.5	7.5
Uruguay	5.1	4.0	19.8	10.2
Venezuela	5.1	- 2.5	50.0	37.0

En el área de la cooperación interregional, el mencionado X Consejo Presidencial Andino aprobó el compromiso de constituir el Mercado Común y reforzar sus relaciones con otros bloques supranacionales; y con la suscripción del Acta o Declaración de Guayaquil, los presidentes andinos pretenden iniciar una nueva etapa de refuerzo de su unidad interna que pueda llevarles a una liberalización total de sus mercados. En el Acta se definen mecanismos para vigorizar la integración de las cinco naciones, así como para proyectarlas hacia otros bloques comerciales como la Unión Europea, con la que mantienen unas relaciones que califican como un modelo de vinculación bloque a bloque. En dicha reunión se concretó el marco general para la creación de la Zona de Libre Comercio con Panamá y se establecieron plazos para la libre circulación de las personas.

También decidieron afrontar conjuntamente los efectos del fenómeno climático de El Niño, lo que representa un espíritu integrador, pese a que Ecuador y Perú son los más afectados. Sin embargo, los temas ecológicos no fueron abordados, ni tampoco se trató el tema de la deuda externa. La Comunidad Andina, que nació hace 29 años, ha pasado por graves momentos de desunión y aislamiento, pero ahora parece que se han sentado unas bases más firmes para afrontar los desafíos cara al siglo XXI, habiéndose fijado para 1999 la próxima cumbre andina, que tendrá lugar en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias.

Pocos días más tarde, el 16 de abril, los dos grandes bloques económicos suramericanos, el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y el Can (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) firmaron en Buenos Aires un acuerdo para levantar todas las barreras aduaneras a partir del año 2000, que fue suscrito por los ministros de Relaciones Exteriores y Comercio de ambos grupos y que afecta a una población de 300 millones. El PIB de esta futura zona de libre comercio iberoamericana equivale al 13 por ciento del total de todo el continente, incluidos Canadá y Estados Unidos. El Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones pusieron de relieve su voluntad de negociar como un solo bloque la configuración del Acta de Libre Comercio de las Américas, ALCA que sería tratada en la II Cumbre de las Américas que comenzó en Santiago de Chile dos días después. Dos etapas de negociaciones deberán facilitar la puesta en marcha de un programa de reducción gradual de aranceles de todos los productos incluidos en el listado aduanero, a partir del 1 de enero de año 2000. Estas negociaciones se llevarán a cabo bajo los compromisos de promover la libre competencia y rechazar las prácticas restrictivas del comercio. El intercambio comercial entre los dos bloques se aproximó en 1997 a los 4.000 millones de dólares, con un saldo de 30 millones a favor del grupo andino. Mientras tanto, Chile, que no forma parte de ninguno de ambos bloques, firmó durante la II Cumbre de las Américas tres acuerdos por separado, uno con México otro con cinco países centroamericanos y el tercero con el Mercosur, para facilitar el proceso de integración hacia la creación del ALCA.

LA SEGUNDA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

A mediados de marzo se reunieron en San José, Costa Rica, ministros de 34 países americanos con el fin de confirmar la denominada Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, que debería recibir un firme espaldarazo en la II Cumbre de las Américas convocada en Santiago de Chile para un mes más tarde. Pero en San José se pusieron en evidencia las diferencias que todavía mantienen estos países respecto al plan de integración, donde los Estados Unidos parecen muy volcados hacia asuntos como el de la propiedad intelectual, mientras que Bolivia, Chile y los cuatro países del Mercosur consideran más fundamental la supresión de aranceles y el libre acceso a los mercados. En la reunión se acordó que Miami se convierta en la primera sede del futuro mercado común interamericano a partir del año 2005, así como que la capital y presidencia del mismo

sigan un turno rotatorio cada dos años, por lo que en su momento Miami cederá su puesto a Panamá y está a su vez a México. En este sentido Canadá ostentará inicialmente la presidencia, para hacerlo a continuación Argentina y Ecuador.

Durante los días 18 y 19 de abril tuvo lugar la II Cumbre de las Américas, a la que asistieron los jefes de estado o de gobierno de las 34 naciones del continente, excepto Cuba, con una agenda de trabajo que comprendía lo que se ha dado en llamar reformas de segunda generación: acceso a la educación de todos los sectores de la población, erradicación de la pobreza, lucha contra el narcotráfico, terrorismo, corrupción, defensa de una justicia independiente, democracia y liberalización económica.

Estados Unidos, país impulsor de la creación de este foro con la primera cumbre celebrada en Miami en 1994, consideraba que continúa ejerciendo el liderazgo de América y que la relación que mantiene con el resto del continente es la mejor en una década, a pesar de los desacuerdos sobre Cuba y las dificultades en el proceso de integración económica destinada a crear la mayor zona de intercambio comercial sin barreras arancelarias de todo el mundo, con un mercado de casi 800 millones de consumidores. Pero Estados Unidos llegó a esta II Cumbre en una posición más débil, debido a la continuada negativa del Congreso norteamericano de autorizar al presidente Clinton el fast track o vía rápida para que facilite la creación del Área de Libre Comercio de las Américas. La falta de esta vía rápida ha impedido también que Estados Unidos haya podido firmar nuevos tratados de libre comercio, entre ellos uno con Chile. Por ello, se ha hablado ya de un nuevo "consenso de Santiago", para reemplazar al viejo "consenso de Washington", con el que se abre una nueva era de relaciones entre Iberoamérica y el poderoso vecino del Norte, en la cual debe primar la igualdad entre todos, poniéndose de relieve la voluntad de esas naciones de negociar como bloque y no bilateralmente, como siempre ha favorecido a Washington. De confirmarse esta situación, Estados Unidos habría perdido la oportunidad de lograr la integración a través de la incorporación progresiva individual al Tratado de Libre Comercio. Contrasta, por otro lado, que junto a la pérdida de protagonismo estadounidense emerge con fuerza la nueva actitud de Canadá, un país que hasta ahora había concentrado su interés en Europa.

Pero además existe otro factor que hace persistan diferencias entre Iberoamérica y Estados Unidos, y es el tema sobre Cuba. Washington se opone a la incorporación de La Habana a las Cumbres de las Américas y

como miembro de pleno derecho de la Organización de Estados Americanos mientras no se convierta en una democracia. Frente a esta posición está la de algunas naciones, como Perú, donde el presidente Fujimori declaró "no hay derecho a que un país que no representa amenaza alguna para el continente sufra como consecuencia de un bloqueo que no es sufrimiento para su gobierno, sino para diez millones de cubanos". En parecidos términos se manifestaron otros mandatarios, si bien pusieron ciertas condiciones a Fidel Castro, como la liberación de los presos políticos y un avance hacia el sistema democrático. Por otra parte, algunas naciones no se pronuncian sobre las relaciones con Cuba, si bien es conocido su apoyo. Pero el problema se agudizó al hacerse público que el primer ministro de Canadá iba a viajar a Cuba la semana siguiente a la celebración de la cumbre. Igualmente, varias naciones manifestaron su intención de invitar a Cuba a que asista, dentro de cuatro años, a la próxima reunión que se celebrará en Ottawa.

En la clausura de la conferencia se acordó seguir impulsando el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas y se elaboró lo que se conoce como Plan de Acción y Declaración de Santiago. Aunque el Plan de Acción contiene 170 puntos, carece en muchos aspectos de objetivos claros, recursos y mecanismos adecuados para su seguimiento, y en opinión de diversos especialistas tiene muchas más iniciativas de las que el sistema interamericano puede asumir seriamente. El documento expresa en primer lugar un claro compromiso de defensa de la democracia y de ampliación de sus espacios, si bien no contiene una cláusula democrática para el futuro del ALCA, tal como existe en la Unión Europea, en el Mercosur y en la Carta de la OEA. Otros puntos importantes se refieren a la erradicación de la pobreza, la educación y los derechos humanos, para lo cual se incluyó una financiación de 45.000 millones de dólares, procedentes en créditos del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y del Departamento de Ayuda al Desarrollo de los Estados Unidos, proponiéndose que en el año 2000 todos los niños del continente tengan acceso a la educación básica y tres de cada cuatro adolescentes a la enseñanza media, y que un número significativo de los 50 millones de empresas pequeñas y medias tengan más fácil acceso a la banca en el año 2000, así como mejorar la sanidad y la nutrición. El Plan plantea lograr antes del año 2002 una igualdad jurídica entre hombres y mujeres y la promoción de medidas para combatir el tráfico de menores, la prostitución y la pornografía infantil, y un compromiso para modernizar la justicia y velar por los derechos de los emigrantes.

Uno de los temas más debatidos fue la lucha contra el narcotráfico, donde, como ya se señaló anteriormente, se acordó el fin de la certificación unilateral de los Estados Unidos. También se ratificaron en la necesidad de combatir la corrupción con fondos requisados a mafias y al tráfico de drogas y convocaron una Segunda Conferencia Especializada Interamericana para evaluar la lucha contra el terrorismo. Asunto igualmente recogido fueron los medios de comunicación social, pues en los últimos dos años cerca de doscientos periodistas han sido asesinados, por lo cual se acordó constituir una agencia que controle el libre ejercicio de sus funciones y realice un seguimiento de la situación. Para evaluar los progresos que se vayan obteniendo se constituyó un Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres, formado por los cancilleres que deberá reunirse dos o tres veces al año. Sin pronunciamiento sobre Cuba, sin embargo el presidente de Brasil reclamó su presencia para próximas cumbres diciendo: "un país está ausente, tiene un gran desarrollo en educación y salud y no veo razón para que no se integre en la comunidad democrática". Como comentario final debemos señalar que para la próxima cumbre, en el año 2002, deberá cambiar sustancialmente la actitud norteamericana, pues los países del Mercosur prosiguen su diálogo con la Unión Europea, la Comunidad Andina se fortalece interiormente y todos, individualmente, incrementan sus relaciones bilaterales.

Una de las mayores sorpresas que este año han deparado las relaciones interamericanas ha sido la política de Canadá hacia los países al sur de Río Grande, que se ha materializado con el viaje del primer ministro, Jean Chrétien, a México, Brasil, Argentina y Chile a principios de año para, como se mencionó con anterioridad, hacer otro a Cuba a continuación de la II Cumbre de las Américas. A finales del pasado año, el Secretario de Estado canadiense para Iberoamérica, David Kilgour, decía que su país: "es un país de América, hecho geográfico que ahora es confirmado por la historia" pues, aunque parezca obvio, la pertenencia política de Canadá al continente es muy reciente, se efectuó en 1990 al ocupar su puesto en la Organización de Estados Americanos, OEA, la institución más importante en el ámbito regional. El gobernante canadiense estuvo en su gira acompañado por lo que se conoce "Team Canada 98", mezcla de misión diplomática y comercial creada hace pocos años, en el que figuran 500 hombres de negocios. Por esta razón, ya en 1995 el gobierno de esta nación definió a Iberoamérica como una región de especial interés estratégico y ejemplo de ello es que, en los últimos cuatro años, las exportaciones canadienses a esta región se incrementaron de 260.000 millones de pesetas a

500.000, cifra que supera las exportaciones de Alemania y Francia, además de otros 200.000 millones en contratos que se están negociando en estos meses. Si México es considerado en Ottawa un cliente clave (hay que recordar que esta nación pertenece al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá), con Chile está en vigor desde 1997 un acuerdo de características similares y ahora los ojos se dirigen con detenimiento al Mercosur. Pero este incremento de relaciones económicas también ha beneficiado a su política exterior. Con el apoyo iberoamericano, Canadá ha podido sacar adelante algunos de sus proyectos, como el tratado de prohibición de minas antipersonales, la prolongación del cuerpo de paz en Haití o la oposición a la ley Helms-Burton que penaliza el comercio con Cuba. Y fue precisamente el viaje de Chrétien a La Habana lo que desencadenó el enfado de Bill Clinton, que intentó persuadir al político canadiense, sin conseguirlo, que anulase su visita a la isla caribeña. En un intento de contrarrestar esta irrupción canadiense, a principios de mayo fuentes norteamericanas hicieron público que el conjunto de las inversiones estadounidenses en Iberoamérica se elevaba a 76.400 millones de dólares, equivalente a casi 11 billones de pesetas, de acuerdo con las cifras ofrecidas por la Reserva Federal.

LA VIII CUMBRE IBEROAMERICANA

A diferencia de las ediciones anteriores, la VIII Cumbre Iberoamericana, que se celebró en la ciudad portuguesa de Oporto, durante los días 17 y 18 de octubre, tuvo un formato más reducido y la novedad principal fue la supresión de los discursos que pronunciaban los veintitrés jefes de Estado y de Gobierno participantes, que hacían que las sesiones fueran poco prácticas, facilitándose así la posibilidad de mayores contactos entre los mandatarios y más frecuentes las conversaciones de carácter bilateral, lo que se tradujo en un documento final más corto, más incisivo y con mayor impacto político. Este nuevo formato se ajustaba mejor al espíritu y a los objetivos que se pretendían alcanzar en estas cumbres.

Igualmente, el impulso de España y de otras naciones iberoamericanas para que las cumbres fuesen más ágiles y operativas y se pudiese efectuar un seguimiento más detallado de los proyectos de desarrollo que fuesen siendo aprobados en estos encuentros, resultaría plenamente eficaz con la creación de una Secretaría de Cooperación de carácter permanente. Ello no supone la desaparición de la Secretaría "pro t mpore", de la que forman parte los representantes del pa s que ese a o ejercen la Pre-

sidencia, de los países que la tuvieron el año anterior y de los que la ejercerán al año siguiente. España es partidaria de dotarla de un gran peso político, por lo que considera que debería estar al frente de la misma una personalidad de reconocido prestigio que haya ocupado cargos de responsabilidad en alguna nación iberoamericana.

La Declaración de Oporto, referida a *“los desafíos de la globalización y de la integración regional”*, destaca la creación de la Secretaría de Cooperación, señalada anteriormente, cuya estructura y funcionamiento será propuesta por los responsables de Cooperación y Coordinación Iberoamericanos y presentada durante la IX Cumbre que se celebrará en La Habana en 1999. El documento reitera “el compromiso de fortalecer las instituciones democráticas, el pluralismo político, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales”, y en este aspecto hay que destacar que Fidel Castro puso su firma cuando en su régimen no se garantiza el derecho de reunión o asociación o en el que existen más de trescientos presos de conciencia. La Declaración consagra, en su apartado segundo, “los principios de soberanía y de no intervención y el derecho de cada pueblo a construir libremente en paz, estabilidad y justicia su sistema político” y la existencia de “un sistema justo de cooperación y de relaciones internacionales”. Igualmente se señala que “la actuación de nuestros Gobiernos debe tener como objetivos la búsqueda de la justicia social, la elevación de los niveles de bienestar de las sociedades, la promoción de políticas de apoyo a los sectores más vulnerables y el refuerzo de la cooperación internacional”. También se hace hincapié en la necesidad de adoptar “medidas más eficaces por parte de la comunidad internacional y especialmente de los países del G-7 y los organismos financieros” que propicien la estabilidad de los acuerdos para el crecimiento económico duradero y subraya que debe impulsarse la ayuda entre los Estados, ya sea en el plano bilateral o por mediación de organizaciones internacionales e igualmente se exhorta a la solidaridad en asuntos como la renegociación de las deudas externas o las iniciativas de eliminación de minas antipersonas en América Central.

El apartado octavo del documento destaca que “la convivencia internacional exige el respeto a los principios y normas del Derecho Internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y a la soberanía de los Estados. Por eso, los países iberoamericanos rechazamos enérgicamente la aplicación extraterritorial de leyes nacionales. En este contexto, reiteramos nuestra exhortación al Gobierno de los Estados Unidos de América a que ponga fin a la aplicación de la Ley Helms-Burton”. La claridad y contun-

dencia de esta exigencia se considera un triunfo de Fidel Castro y una concesión, ya que en 1999 se celebrará en Cuba la IX Cumbre Iberoamericana. Los estadistas iberoamericanos reafirmaron su apoyo al Tribunal Penal Internacional como “paso importante” y destacaron “la gravedad que reviste el problema de las drogas, en la medida que tiene un efecto profundamente nocivo sobre los individuos y las sociedades y repercute negativamente en el funcionamiento de las instituciones democráticas y en las economías”, haciéndose un llamamiento para que se desarrollen mecanismos de coordinación aptos para hacer frente a la destrucción de la naturaleza y a la creciente degradación de los ecosistemas, la cooperación judicial y la lucha contra la corrupción, terrorismo y el crimen organizado.

La Declaración destaca, en el apartado 12, que es de suma importancia la Cumbre entre Iberoamérica y el Caribe con la Unión Europea, que se celebrará en Río de Janeiro en junio de 1999, defendiéndose el papel de la integración regional en un mundo globalizado y apoyar las iniciativas regionales. Así mismo, señala que es preciso “intensificar la cooperación bilateral y multilateral en los campos de la cultura y la educación”. Se exhorta igualmente “al apoyo de los Programas y Proyectos de cooperación aprobados por las sucesivas cumbres, para que contribuyan a potenciar un espacio iberoamericano”. Dos éxitos colaterales realzaron el éxito global de la cumbre de Oporto, el anuncio de la solución del conflicto fronterizo entre Ecuador y Perú y el respaldo firme e incondicional del recién elegido presidente de Colombia, Andrés Pastrana, al proceso de pacificación que abrió tras llegar al poder en agosto del 98.

Uno de los grandes triunfadores de la Cumbre fue el presidente del Gobierno español, José María Aznar, quien reiteró el compromiso de nuestra Patria con los países iberoamericanos y nuestra voluntad de apoyar en todos los foros que les ayude a superar la crisis financiera, de la que no se les considera responsables. El presidente español señaló que la situación económica internacional no debe ser una razón para apartarse del modelo económico basado en la liberalización, la estabilidad y la competitividad y expuso la necesidad de restablecer el acceso normal a los mercados de capitales por parte de Iberoamérica. Comunicó la decisión de su Gobierno de aportar 3.000 millones de dólares para nuevas iniciativas de apoyo financiero que el FMI pudiera acometer en Iberoamérica y que plantearía la necesidad de la solidaridad con Iberoamérica en el Consejo Europeo, en la reunión que se celebraba una semana más tarde en la localidad austríaca de Pörschach. Por otro lado, la Cumbre puso de manifiesto la buena

situación de las relaciones hispano-cubanas, que propiciaron reuniones de S.M. el Rey y de José María Aznar con Fidel Castro, en las que se abordó la visita de los Reyes de España en la primavera de 1999, previa a la IX Cumbre Iberoamericana de La Habana.

A pesar del espíritu de entendimiento reinante y del éxito de la Cumbre, el ambiente de la misma se vió afectado por la decisión del juez español Baltasar Garzón de solicitar el enjuiciamiento del ex-presidente chileno, general Augusto Pinochet y hoy senador vitalicio de su país, que estaba entonces convaleciente en Londres de una operación quirúrgica. El impacto de la noticia empañó el protagonismo e imagen de la VIII Cumbre Iberoamericana.

LAS NACIONES IBEROAMERICANAS

Para *Centroamérica*, 1998 será un año difícil de olvidar debido al desastre y desolación causados por el huracán Mitch, el segundo más destructor que ha azotado la zona en este siglo. El huracán, que arrasó El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, se cebó particularmente en los dos últimos países, causando un número de muertos que pudiera superar las 20.000 víctimas. Junto a la tragedia de las pérdidas humanas están los graves daños causados a las infraestructuras, agricultura, viviendas, industrias y servicios de la región, estimando los especialistas que la devastación ha retrocedido la vida de estos países en más de 20 años. Cuando los análisis iniciales pusieron de relieve la magnitud de la catástrofe, surgió un gran sentimiento internacional de solidaridad, particularmente en España y los países de la Unión Europea. Tanto a nivel oficial como de las ONG,s, la ayuda a estas naciones ha alcanzado unos niveles impresionantes, habiendo sido condonada por la mayoría de los miembros de la UE la práctica total de la deuda de los países afectados y aprobado por la Unión un completo plan para la reconstrucción. Conviene tener presente que, según fuentes del Banco Mundial, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua deben al mundo en conjunto 17.000 millones de dólares.

Antes de la tragedia, Centroamérica venía desarrollando una vida muy activa, destacando la puesta en marcha de la *Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas*, CFAC, que había sido constituida a finales de noviembre de 1997 por los presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Esta Conferencia tiene por objeto la integración y cooperación militar en la región, la elaboración de una Reglamento para unifi-

car procedimientos en los campos logísticos, educativos y enseñanza, inteligencia y otros aspectos militares. En este ámbito de la Defensa han continuado en 1998 los programas de reducción de los efectivos de las fuerzas armadas en la mayoría de las naciones de la zona. En *El Salvador* se han reducido a 24.600 sus efectivos, *Guatemala* a 31.400 y *Honduras* a 18.300. Mientras, *Nicaragua* continúa manteniendo 17.000 soldados después del nivel que había alcanzado la guerra civil finalizada en 1991, cuando llegó a tener cerca de 70.000 personas encuadradas en sus ejércitos. *Costa Rica* y *Panamá* no disponen de fuerzas armadas, habiendo incrementado la primera ligeramente el número de las fuerzas de seguridad en 1.400, en tanto que Panamá no ha registrado variación alguna, manteniendo el nivel de 11.800 efectivos que tenía en 1997. Precisamente estas dos últimas han sido las únicas de la región que han experimentado un aumento de sus presupuestos de seguridad, al subir la primera a los 70 millones de dólares (un 20 por ciento más que el año anterior) y la segunda hasta los 125 millones, que significa un 10 por ciento respecto a 1997. La necesidad de encontrar una paz estable, tras los años turbulentos de la década pasada, llevó a estas naciones a una significativa reducción de las fuerzas armadas, pero a la vista del aumento espectacular del crimen organizado, algo casi lógico en las sociedades después de conflictos, quizás esa desmovilización se produjo demasiado rápido pues afectó a todas ellas y particularmente a El Salvador y Colombia.

En lo que a la vida nacional se refiere, hay que destacar la elección, como nuevo presidente de *Costa Rica*, del socialcristiano Miguel Angel Rodríguez, en los comicios que se celebraron el 1 de febrero, en una jornada sin traumas y a cuya toma de posesión asistió el Príncipe de Asturias. El 9 de febrero comenzó la XIV edición del Grupo de San José para fomentar el diálogo entre la Unión Europea y los seis países centroamericanos. Sin embargo, la vida de *Guatemala* se vería profundamente sacudida por el asesinato del Arzobispo Juan Gerardi, creador de la oficina de Derechos Humanos de su país. En el ámbito internacional, el 27 de enero el Gobierno anunciaba la normalización de las relaciones con Cuba. En la misma medida, la violencia sacudió a *Honduras*, donde Orlando Fúnez dirigente del principal partido de la oposición y ex-ministro de Coordinación, Planificación y Presupuesto del ex-presidente Rafael Callejas fue asesinado en las calles de Tegucigalpa. A finales de enero asumió la Presidencia Carlos Roberto Flores, asistiendo igualmente a su investidura el Príncipe de Asturias. En *Panamá*, el 30 de agosto, el presidente Ernesto Balladares ganó el referéndum que le permitirá aspirar a la reelección

inmediata. A mediados de febrero se celebró la VIII reunión del Grupo de Río y la UE, con la asistencia de 23 cancilleres. En el área de la cooperación política y económica regional hay que recordar la XII Cumbre del Grupo de Río, que se celebró a principios de septiembre de 1998, que además facilitó el acercamiento de posiciones entre Ecuador y Perú, que les conduciría al acuerdo de paz entre las dos naciones.

Como se aventuraba en la edición anterior de *"Panorama Estratégico"*, la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba hay que valorarla como el suceso más importante de 1998 para la isla caribeña. La visita de Su Santidad, realizada entre el 21 y el 25 de enero, convirtió a Cuba en el centro de la atención mundial y los medios de comunicación internacionales, representados por unos cinco mil periodistas, pudieron dar testimonio de la calurosa bienvenida dispensada por centenares de miles de isleños, fuesen cristianos, santeros o ateos revolucionarios. El hecho de que antes de la visita papal el cardenal arzobispo de La Habana, monseñor Ortega y Alamino (que a finales de los años sesenta fue obligado a 10 años de trabajos agrícolas en las Unidades Militares de Ayuda a la Producción), pudiera dirigirse sin trabas y cortapisas a través de la televisión cubana a toda la nación, tras 39 años de censura total, era muestra de que tras la llegada de Juan Pablo II ya no sería todo igual en Cuba. El afecto y respeto con los que Fidel Castro distinguió al Pontífice pareció indicar cierta simpatía recíproca entre ambos, aunque el discurso de bienvenida de Fidel Castro en el aeropuerto tuviera un descarado matiz de mitin político, en el que descalificó a la Iglesia por los errores del pasado, y estuvo desafortunado en el repaso a la descolonización española. Pero Juan Pablo II aprovechó todas las ocasiones que tuvo de hablar en público para recordar a Fidel Castro y a los cubanos la falta de libertad, carencias materiales, el dolor y la miseria de una gran parte de la población y criticar el sistema educativo y la despenalización del aborto. Para entender la clave de la visita papal, hay que recordar las frases que se intercambiaron en el Vaticano en la primera entrevista celebrada en 1996 entre Fidel Castro y Su Santidad. "No puedo abrirme al mundo porque tengo una pistola en la sien", dijo Castro. A lo que respondió el Papa, "Tú ábrete al mundo, que yo te quitaré la pistola". Juan Pablo II ofreció al líder cubano su mediación desinteresada para que se levante el embargo norteamericano, que fue duramente criticado por el Pontífice, y exhortó a Fidel Castro a que "Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba". Fruto inmediato de la visita papal fue la liberación de 299 presos cubanos, indultados a petición del Vaticano, aunque el canciller cubano Roberto Robaina se apresurase a advertir que ello no signifi-

caba una apertura política y como muestra estaba la negativa a liberar a 70 presos políticos.

La descalificación pública de la ley Helms-Burton por el Papa tuvo un amplio eco internacional, en particular en las naciones iberoamericanas y en la Iglesia católica. Algunos cancilleres, como el chileno José María Insulza, se pronunciaron a favor de una postura conciliadora norteamericana hacia Cuba, pues “no representa un peligro para la seguridad de Estados Unidos ni de nadie”. Por su parte, el presidente del Comité episcopal de política internacional de los obispos norteamericanos, monseñor Theodore McCarnik reclamó que “ya era hora de promover la reconciliación entre nuestros pueblos” y solicitó a su Gobierno que se pudiera hacer llegar a la isla alimentos y medicinas. Igualmente, la Iglesia en Alemania sugirió a sus dirigentes políticos el establecimiento de “una cooperación bilateral con Cuba”. La condena al embargo estadounidense ha continuado recibiendo adhesiones en todo el mundo, muy particularmente dentro de Norteamérica, donde políticos y empresarios abogan por un levantamiento, llegando a reconocer la propia Casa Blanca por medio de su portavoz Mike McCurry que la controvertida ley Helms-Burton no ha alcanzado los resultados que esperaban. Por parte española, el Consejo de Ministros aprobó el 13 de febrero un proyecto de ley para proteger a los españoles que inviertan en Cuba, de acuerdo con el mandato de la Unión Europea, por el que cualquier ciudadano que se vea afectado por la ley Helms-Burton recibe compensaciones económicas. La actitud europea obligó a que el número dos del Departamento de Estado, Stuart Eizenstat, viajase en febrero a Bruselas y ofreciese una paz comercial sobre la citada ley. En este sentido, el 19 de marzo el Gobierno de Washington anunció ciertas medidas que suavizaban el embargo: autorización de vuelos directos por motivos humanitarios, aumento de remesas de divisas de cubanos residentes en Estados Unidos y envío de medicamentos y artículos de primera necesidad.

En un informe presentado al Congreso, el Secretario de Defensa, William Cohen, manifestó el 30 de marzo que Cuba ya no representa una amenaza para los Estados Unidos, pues “las Fuerzas Armadas Revolucionarias han quedado gravemente disminuidas y gran parte de su material inservible” y se restaba importancia a los peligros que pudieran plantear las armas químicas o bacteriológicas que supuestamente pudiera poseer el régimen de Fidel Castro. Para el Pentágono, el mayor riesgo lo representa la posibilidad de una masiva emigración cubana, como ocurrió cuando en 1994, 20.000 balseiros llegaron a suelo norteamericano.

Aunque la Comisión de Derechos Humanos de la ONU rechazó el 21 de abril un proyecto de resolución de Estados Unidos, por el que se acusaba al Gobierno de Fidel Castro de violar los derechos humanos, el primer ministro de Canadá, Jean Chretien, en su visita a Cuba tras la II Cumbre de las Américas, insistió ante el mandatario cubano en la excarcelación de presos políticos y el respeto de la Declaración de los Derechos Humanos. El 18 de mayo, Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron un acuerdo por el que se exime a las inversiones europeas en Cuba de las sanciones contempladas en la ley Helm-Burton, pero no contra los ejecutivos y accionistas de las empresas, porque ello depende de la autorización del Congreso. El 10 de octubre, el ex-secretario de Estado Henry Kissinger exigió públicamente una revisión de la política de su país con Cuba.

Pero para España, el suceso más significativo ha sido la normalización de las relaciones con Cuba, tras la designación de Eduardo Junco Bonet como embajador en La Habana, que tuvo lugar el 2 de abril y que ponía fin a la crisis diplomática de casi 500 días de duración, iniciada cuando el gobierno cubano retiró el placet al entonces embajador designado José Coderch. España impuso dos condiciones previas: que el embajador tuviera libre contacto con todos los sectores sociales, así como libertad de movimientos, y un estricto control de los refugiados etarras y de los narcotraficantes que buscaran escondite en la isla. La nueva situación ha abierto el camino para que los Reyes de España puedan visitar oficialmente Cuba el año 1999, independientemente de la visita obligada ese mismo año que tendrán que realizar posteriormente con motivo de la IX Cumbre Iberoamericana. Por otra parte, se han intensificado las relaciones comerciales y contactos políticos entre las dos naciones. Muestra de ello fue la llegada a La Habana el 16 de abril de una delegación de 97 empresarios españoles, encabezada por el presidente de la CEOE, José María Cuevas, que entre otros objetivos tenía la renegociación de la deuda cubana, que se eleva a 138.000 millones de pesetas, y la apertura de una oficina de asesoría para las empresas españolas. Fidel Castro mantuvo una larga reunión con los directivos de la CEOE y se firmó un protocolo entre la CEOE y el Gobierno cubano para enmarcar las relaciones de la organización empresarial con la isla. Posteriormente, en la madrugada del 4 de junio, Fidel Castro asistió a la recepción ofrecida por el comandante del buque escuela "Juan Sebastián Elcano", con motivo del viaje a la isla, que se efectuaba cien años después del fin de la guerra del 98. De gran importancia sería la visita realizada por el ministro de Industria y Energía, Josep Piqué, entre el 21 y 25 de junio, acompañado por altos cargos de su departamento, los presi-

dentes de Endesa, Iberia, Indra, Ebro, Red Eléctrica y ejecutivos de otras empresas, Telefónica, Roca, Iberdrola, Renfe, Dragados y un largo etcétera. Piqué tuvo la oportunidad de entrevistarse varias veces con Castro. Así mismo, otros políticos españoles visitaron la isla, destacando entre ellos el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga.

En el ámbito internacional, el líder cubano asistió el 22 de agosto en la República Dominicana al Foro del Caribe (Cariforum), invitado como observador, y en el que participaron los 15 Jefes de Estado y de Gobierno de los países caribeños. El presidente dominicano Lionel Fernández manifestó que Cuba formaba parte de la región y “no podíamos tener un encuentro de esta naturaleza con su exclusión”.

La ya citada Cumbre Iberoamericana de Oporto puso en evidencia el buen estado de las relaciones hispano-cubanas, como se desprende de las reuniones mantenidas por el Rey y el presidente del Gobierno con Fidel Castro. Consecuencia de estos encuentros fue el viaje oficial a La Habana del ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, realizado entre el 8 y el 11 de noviembre, y cuya agenda comprendía la preparación y fijación de las fechas de la visita de los Reyes en 1999, la renegociación de la deuda, firma de varios acuerdos (entre ellos uno de cooperación mutua sobre el tráfico de drogas) y la excarcelación de cuatro opositores del Grupo de Apoyo de la Disidencia Interna, acusados de sedición y que llevaban 14 meses de prisión sin juicio.

Aunque el Procurador General de la *República Dominicana* confirmaba el 1 de abril que estaba estudiando la extradición de la etarra Belén González, que había sido solicitada por el Gobierno español, a finales de octubre, días antes de las elecciones autonómicas del País Vasco, ella y su compañero Angel Iturbi Abásolo lograron escapar del país. En las elecciones parlamentarias y municipales celebradas el 16 de mayo, el Partido Revolucionario Dominicano logró 25 de los 30 escaños del Senado y la mayoría de diputados y cargos municipales. Hecho histórico fue la visita del presidente Leonel Fernández a Haití, pues desde 1934 ningún mandatario dominicano había viajado al país vecino. La visita, iniciada el 20 de junio, tenía entre otros muchos objetivos el abordar el grave problema migratorio que plantea la presencia de más de medio millón de trabajadores haitianos. El Foro del Caribe, al que asistieron 15 jefes de Estado de la región, se reunió en Santo Domingo del 21 al 22 de agosto.

El año 1998 podría ser considerado para *Argentina* como el de la reorganización de sus Fuerzas Armadas, merced a la tramitación por parte del

Congreso y el Senado de un proyecto de ley que algunas fuentes militares han calificado como una amplia directiva operativa, que define las líneas políticas, orgánicas y funcionales de su organización militar. El padre de la ley 24948 es el político José H. Jaunarena, que la concibió para potenciar la capacidad militar argentina a fin de alcanzar los objetivos de la Seguridad Nacional, incluyendo el apoyo a la estabilidad internacional y a las operaciones de mantenimiento de la paz. Por primera vez las Fuerzas Armadas tienen un mandato político que apoye sus misiones fuera de las fronteras nacionales, que fue completado con otras dos leyes, la 23554 sobre la nueva Defensa Nacional y la 24059 de la Seguridad Interior, con las que se cubre todo el posible espectro de las operaciones militares. Sin embargo, hay que advertir que la ley de Seguridad Interior prohíbe que las fuerzas armadas participen contra objetivos domésticos, cuya responsabilidad es propia de las fuerzas policiales, si bien contempla que puedan prestar ciertos apoyos, como podría ser en la lucha contra el narcotráfico o contra grupos armados dentro del territorio nacional. Por otro lado, la posibilidad de establecer un marco regional de seguridad entre Argentina, Brasil, y Chile, basado en medidas de confianza y operaciones militares combinadas, permiten una proyección internacional de sus fuerzas armadas que va más allá de la participación en operaciones de mantenimiento de la paz.

El territorio nacional se dividirá en áreas estratégicas, con un mando militar conjunto cada una, con lo que las cadenas militares de mando existentes se verán reducidas. Las unidades operativas dentro de cada área serán agrupadas de forma que exista un mejor aprovechamiento de las instalaciones y del entrenamiento, lo que facilitará un ahorro considerable, que podrá reflejarse en una mejora de las retribuciones del personal. En tiempo de paz, las Fuerzas Armadas estarán integradas por personal en activo y reservistas, con énfasis en la rápida disponibilidad más que en la entidad de la fuerza. Así mismo, el sistema militar de enseñanza se integrará en el sistema educativo nacional. En lo que al material y equipo se refiere, se procurará unificar aquéllos que puedan tener una utilización común y todas las adquisiciones en el exterior deberán llevar transferencias tecnológicas, compensaciones industriales y, cuando proceda, incluirán medios de entrenamiento tales como simuladores. Las industrias de defensa serán privatizadas y las inversiones extranjeras en el sector serán bienvenidas.

Por vez primera, las fuerzas armadas poseerán un presupuesto plurianual, con un incremento del tres por ciento para 1999, de los 3.505 millo-

nes de dólares previstos para 1998, porcentaje que se mantendrá durante los próximos cuatro años. “No es mucho”, dice Jaunarena, “pero al menos se invertirá la anterior tendencia a la baja”. La ley contempla entre 1999 y el año 2003 una inversión de mil millones de dólares en la modernización del material, incluida la compra de nuevos equipos, y la financiación deberá proceder mayormente de la venta de instalaciones y propiedades militares. Igualmente se definirá qué material se conserva, cuál debe ser modernizado y el que será dado de baja. La implementación de la ley será supervisada por un comité de seis senadores y seis diputados pertenecientes a las respectivas comisiones de defensa de las dos Cámaras. A los tres meses de entrada en vigor de la ley, el Ministerio de Defensa debe informar al comité del cumplimiento de objetivos, tales como nuevas estructuras operativas y de apoyo, propuestas de reducción de personal, cambios en el sistema de pase a retiro y nuevas retribuciones. Al año de entrada en vigor deberán estar definidos los requisitos de las fuerzas de reservistas, los presupuestos y programas a largo plazo, plan de movilización nacional e identificación de las instalaciones que serán vendidas. Tres años más tarde deberá estar finalizado el estudio para integrar la enseñanza militar en el sistema educativo nacional, completado el diseño de una red informática militar, etc. Los legisladores pretenden que todo el desarrollo del marco de la reforma deberá estar concluido en el plazo de cinco años. Sin embargo, todo ello llevará consigo aspectos dolorosos, pues el objetivo de disponer de una fuerza más capaz y operativa tiene como contrapartida la reducción de su entidad, que ya de por sí es pequeña, pues hoy día los componentes de las Fuerzas Armadas son tan sólo 74.000, de los cuales 10.000 son soldados y el resto cuadros de mando. Una reducción de un veinte por ciento podría ser traumática y excesiva.

La vida nacional siguió viéndose sacudida por el tema de los desaparecidos. El arresto del teniente general Jorge Rafael Videla, ordenado por el juez Roberto Marquovich, por el presunto robo y cambio de identidad de algunos bebés de prisioneras políticas, y su ingreso en la prisión de Caseros llevó cierta inquietud al estamento militar. Pero más graves fueron las consecuencias de la decisión del juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, para “que comparezcan en Madrid 200 militares argentinos, nueve de ellos con orden de captura recomendada”, pues como dijo el presidente Carlos Menem “me ha colocado en la necesidad de asumir la tarea de desbaratar esta maniobra de acoso judicial a las fuerzas armadas argentinas por parte de aquéllos que no entienden el proceso de pacifi-

cación y que tanto daña a las relaciones hispano-argentinas". Estas palabras fueron pronunciadas por el presidente en la base naval de Puerto Belgrano, 980 kilómetros al sur de Buenos Aires, ante un grupo selecto de mandos de la Marina de Guerra, ante quienes aseguró, "ser el presidente que más cerca ha estado de las Fuerzas Armadas y estoy honrado por eso. Siempre van a tener a este presidente de su lado y espero que este mensaje les sirva de aliento". En relación con el tema de los desaparecidos, el Parlamento argentino se mostró a favor de derogar las leyes de amnistía de Punto Final y Obediencia Debida, pero sin carácter retroactivo, lo que permitirá juzgar las violaciones de derechos humanos que puedan producirse en el futuro.

Sobre su presentación a una nueva reelección, el presidente Menem, en un discurso pronunciado en el mes de julio de 1998, anunció que no se presentará a un segundo mandato consecutivo, para evitar fracturas en el seno de la comunidad e insistió en su disposición a presentarse ante la justicia cuando abandone el poder el año próximo, y que a partir de ese momento comenzaría a trabajar para regresar a la Presidencia en el año 2003. Ante la grave situación económica internacional desencadenada en el verano de 1998, el presidente advirtió que la nación contaba con reservas de divisas suficientes para afrontarla y que mantendría la paridad del peso con el dólar a capa y espada. Sin embargo, Argentina se enfrenta a tasas de desempleo del 14 por ciento y una subida del PIB del 5 por ciento frente al 8.6 prevista doce meses antes, temiéndose que el fuerte endeudamiento perdure durante todo 1999, a pesar de las medidas adoptadas. El 24 de julio finalizó la XIV Cumbre de Mercosur, a la que asistieron los presidentes de Bolivia y Chile como asociados a la zona de libre comercio.

A finales de octubre, el presidente efectuó el primer viaje oficial de un mandatario argentino a Gran Bretaña después de la guerra de las Malvinas. En su visita, Carlos Menem pidió a las autoridades británicas que sumen su buena voluntad a la de su país para encontrar una solución amistosa al diferendo sobre las islas del Atlántico Sur, 16 años después del conflicto armado.

En enero de 1998 se presentó en *Bolivia* el plan quinquenal contra la droga, cuyo objetivo es eliminar 38.000 hectáreas de cultivos ilegales, invirtiendo 952 millones de dólares, desplazando a 15.000 familias y ofreciendo proyectos alternativos a otras 20.000. Asimismo, el plan preveía aportaciones económicas por parte de la Unión Europea, de Estados Unidos y del Fondo para el Desarrollo de las Naciones Unidas. A pesar de que

los indicadores económicos bolivianos eran esperanzadores para 1998, si bien con un ligero repunte de la inflación, a principios de abril la Confederación Obrera Boliviana, COB, convocó una huelga general en demanda de mejoras salariales que derivaría en graves incidentes al tratar el ejército de evitar que los coccaleros de la región de Cochabamba bloqueasen la carretera general, produciéndose algunos muertos. El Gobierno acusó a los narcotráficantes de la provocación de estos incidentes, pues a los cosechadores de la hoja de coca se les ha reducido el 40 por ciento del bono de unos 2.300 dólares que el Gobierno les pagaba por la eliminación de cada hectárea cultivada, por lo que los comerciantes de la droga intentaban prolongar su actividad lo más posible. A raíz de la detención del general Augusto Pinochet en Londres, algunos sectores políticos encabezados por el Movimiento Nacional Revolucionario pretenden que el presidente Hugo Bánzer sea juzgado por crímenes contra la Humanidad, por considerar que estuvo implicado en la llamada *Operación Cóndor* de los años 70, en la que dictadores suramericanos coordinaban sus acciones contra los grupos izquierdistas.

A principios de 1998 se conocieron los planes de *Brasil* de revitalizar la aviación naval embarcada en el portaaviones Minas Gerais, con la posible compra a la fuerza aérea de Kuwait de 23 A-4 Skyhawk, por un importe de 70 millones de dólares. Desde tiempo atrás, la Marina brasileña viene preparándose para utilizar aviones embarcados y en los últimos ejercicios ARAEX, aviones argentinos Super Etendard estuvieron operando desde el mencionado portaaviones, así como un S-2E Tracker igualmente argentino. La Marina argentina viene cooperando con la brasileña en este campo desde hace pocos años, habiendo formado a dos aviadores de este país y prestado un A-4Q para estudio de compatibilidad. Caso de que Brasil adquiriera los Skyhawk sería el único país del continente, excepto Estados Unidos, con capacidad de aviación embarcada.

Sin embargo, tres acontecimientos han venido a marcar la vida nacional brasileña a lo largo de 1998 y que cronológicamente han sido: un devastador incendio en la Amazonia, la crisis económica mundial y la reelección del presidente Fernando Henrique Cardoso. El año comenzó con la continuación del incendio forestal que venía asolando la región amazónica de Roraima desde noviembre de 1997 y que durante los primeros meses de 1998 había devastado una zona de casi 40.000 kilómetros cuadrados, una superficie más grande que Galicia. Las autoridades brasileñas rechazaron el ofrecimiento reiterado de ayuda de Naciones Unidas, porque juzgaban que era un problema interno que debía ser resuelto con sus

medios nacionales, en contra de la opinión de la ONU que considera la Amazonia como la mayor reserva mundial de la biosfera, con sus seis millones de kilómetros cuadrados de selva forestal. La presión internacional obligó al presidente Cardoso a aceptar las ayudas argentina y venezolana y a principios de abril fuertes lluvias ayudaron a controlar el incendio. Pero la deforestación de la Amazonia es prácticamente continua, pues tan sólo en los últimos 20 años han ardido 370.000 kilómetros cuadrados. Pero lo más grave es que la deforestación es rentable, una hectárea desbrozada cuesta 23.000 pesetas y una de bosque tropical autóctono solamente 2.300. Además, el incendio llevó consigo una tragedia aún mayor, la destrucción de los cultivos de los indios *Yanomani*, una de las doce tribus que habitan Roraima, según informes del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), que ha denunciado reiteradas veces que a pesar de las garantías constitucionales que prohíben la ocupación de las tierras indígenas, la realidad es otra bien diferente, pues la mayoría de esas tierras está ya invadida por grupos económicos.

A mediados de agosto de 1998, la grave crisis económica mundial, ya comentada anteriormente, llevó a Brasil a una difícil situación que puso en peligro la estabilidad económica de toda Iberoamérica. A finales de 1997 la mayor economía iberoamericana fue la primera que se vió afectada por la depreciación de las monedas de Indonesia, Malasia y Tailandia, por lo que fue el principal objetivo de los especuladores. Razón por la cual el gobierno brasileño se vió obligado a tomar medidas contundentes a comienzos de 1998, tales como la contención del gasto público y la elevación de los tipos de interés por encima del 40 por ciento, para evitar la devaluación del real.

Ello trajo consigo una recuperación de la confianza internacional y el regreso de los flujos financieros que permitieron reducir los tipos al 20 por ciento y llegar en mayo de 1998 a su máximo histórico de reservas de divisas hasta los 70.000 millones de dólares. Pero tales medidas tuvieron un elevado coste político-social y motivaron la ocupación de tierras, el saqueo de supermercados y el asalto a camiones de transporte de víveres, lo que obligó a intervenir al Ejército para restaurar el orden público. Ante estos hechos, la mayor parte de los obispos brasileños, en particular su ala más progresista, criticó las medidas represivas gubernamentales, advirtiendo al Gobierno que en vez de fuerzas antidisturbios deberían enviar cestas con alimentos y cuestionando que hubiera democracia en el país.

En la visita oficial que el presidente Cardoso hizo a España a mediados de mayo dijo que el llamado Movimiento sin Tierra pretendía explotar polí-

ticamente la situación. Pero la fuerte caída de las bolsas internacionales en el verano del 98 hizo perder a Brasil en tan sólo quince días más de 15.000 millones de dólares, llevando al país a un nivel de reservas similar al que tenía en octubre del año anterior y a pesar de las medidas de ajuste fiscal continuó la masiva fuga de capitales, disminuyendo las reservas nacionales hasta llegar el nivel a los 45.000 millones de dólares.

Entre las medidas de emergencia, el Banco Central de Brasil elevó los tipos de interés al 49,75 por ciento anual y revaluó las medidas de ajuste económico del plan de estabilización, anunciando el presidente Cardoso en plena campaña electoral presidencial un severo ajuste del gasto público a los presupuestos de este año y del año próximo. Consecuencia de todo ello ha sido que el Banco Central brasileño admitió que el país tendrá este año un crecimiento inferior al 2 por ciento del PIB, cerrará 1998 con un déficit del 7.3 por ciento del Producto Interior Bruto, el segundo mayor del mundo, sólo superado por el de Suecia (7.7 por ciento) y con una deuda superior a los quinientos mil millones de dólares.

Para atajar la grave crisis, el Gobierno solicitó del Fondo Monetario Internacional y del G-7 una ayuda alrededor de 40.000 millones de dólares, que le ha sido concedida pero que comportará al mismo tiempo un severo plan de austeridad que evite el desmoronamiento de su economía y la devaluación de su moneda, que de llegar a ocurrir llevaría a toda Iberoamérica a una profunda y larga recesión.

El 4 de octubre se celebraron las elecciones generales, en las que se presentaba a reelección el presidente Cardoso como candidato de la coalición de centro-derecha, que ganó con amplia mayoría de votos, superando en más de un 20 por ciento al aspirante que postulaba la izquierda, Luiz Ignacio Lula da Silva, obteniendo igualmente mayoría en las elecciones para gobernadores de los 26 Estados y del Distrito Federal. El triunfo de Cardoso fue acogido con satisfacción en la práctica totalidad de las cancillerías americanas y europeas, así como en las instituciones y organismos internacionales, por considerar que era una victoria de las reformas económicas adoptadas a raíz de la crisis internacional habida, en agosto y septiembre, y que solamente podría llevar a la práctica el recién elegido presidente. Posteriormente, el 25 de octubre se celebraron las elecciones para la segunda vuelta de aquellos gobernadores que no lograron la mayoría absoluta en las elecciones del 4 de octubre y con los que Cardoso deberá contar obligatoriamente para aplicar su plan de ajuste. Con estas elecciones se cerraba el último capítulo del proceso de renovación de

autoridades locales y nacionales, que convalidaba por segunda vez a Cardoso al frente de la Presidencia, renovaba un tercio del Senado, la totalidad de la Cámara de Diputados y actualizaba los cargos legislativos regionales.

El 26 de octubre se firmó en Brasilia el acuerdo de paz que puso fin al enconado diferendo fronterizo entre Ecuador y Perú, con la asistencia de los Reyes de España y de cinco jefes de estado iberoamericanos, debiendo destacarse el protagonismo del presidente Cardoso por haber jugado un importante papel en las negociaciones habidas al actuar como coordinador de las cuatro naciones garantes, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos y de los dos países enfrentados.

Durante 1998 *Colombia* ha vivido marcada por el continuo enfrentamiento entre el Gobierno y la guerrilla, por lo que en la visita del presidente Ernesto Samper a España, a principios de febrero, José María Aznar ofreció que Madrid pudiera ser el escenario donde se celebrasen conversaciones de paz, a fin de solucionar un conflicto que en los últimos 30 años se viene cobrando diez vidas por día. Ello permitió alcanzar un preacuerdo en Madrid, llamado Preacuerdo de Viana, entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, la segunda guerrilla en importancia del país y liderada por el ex-sacerdote español Manuel Pérez, pero que no llegó a un fructífero final puesto que en el mes de abril el grupo guerrillero acusó a las autoridades de utilizar el pacto con fines electorales y favorecer al aspirante del partido gobernante a la presidencia, el liberal Horacio Serpa, al mismo tiempo que se conocía la muerte del curaguerrillero. El domingo 31 de mayo se celebraron las elecciones presidenciales para elegir los dos candidatos que el 21 de junio se disputarían la presidencia, y, tras el recuento, los dos vencedores fueron Serpa por el partido liberal y Andrés Pastrana por el conservador, quedando descartado el candidato independiente Noemí Sanín, que así y todo se aproximó a los tres millones de votos. A pesar de la vigilancia del Ejército y de la Policía, hubo graves atentados y secuestros de los guerrilleros que habían anunciado que no interferirían el proceso electoral. Al día siguiente, el ELN descongelaba el Acuerdo de Paz de Viana y aceptaba la mediación del Premio Nóbel de Literatura Gabriel García Márquez, de España, Francia y Alemania.

Sin embargo, los atentados continuaron durante las tres semanas entre ambos comicios, conociéndose a principios de junio el último informe de Amnistía Internacional que señala que en 1997 hubo cerca de 30.000

mueritos, 114 masacres, 200.000 desplazados, 140 desaparecidos a manos de las fuerzas de seguridad, 600 secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el ELN y 40 aspirantes a alcaldías y concejales asesinados. En la segunda vuelta electoral, el 21 de junio, triunfó el conservador Andrés Pastrana y confirmó su oferta de dialogar con la guerrilla. Efectivamente, a principios de julio el presidente electo se reunió en una zona selvática del este del país, donde las FARC tienen su Cuartel General, con sus dos principales líderes, Manuel Marulanda *Tiro Fijo* y Jorge Briceño *El Mono Jo Joy* y se comprometió a desmilitarizar los cinco municipios que solicitaba el movimiento rebelde para que sirviese como posible escenario de las conversaciones de paz. Pocos días después, el ELN aceptó participar en una cumbre de paz que se iniciaría a partir del 12 de julio en la ciudad alemana de Maguncia con miembros de la llamada Comisión Nacional de Paz, entre los que se encontraban el Procurador General colombiano y el presidente de la Federación Nacional de Comercio, y firmaron la Declaración de Maguncia, que entre otros puntos aboga por la "humanización del conflicto".

Pero el miércoles 5 de agosto la guerrilla colombiana asestó a las Fuerzas Armadas uno de los golpes más demoledores de los últimos años, al arrasar su principal base antinarcóticos, situada en la localidad de Miraflores y que los rebeldes calificaron como "despedida del Gobierno de Ernesto Samper", que cedía el mando a Pastrana el 7 de agosto. En el choque murieron al menos 250 guerrilleros, militares y civiles y se produjeron cerca de 100 heridos. La arremetida guerrillera se extendió a otras provincias, donde también hubo un elevado número de víctimas. A pesar de ello, el presidente Andrés Pastrana reiteró la oferta de paz en su toma de posesión y anunció un profundo cambio político en el país que incluía la paz, la reforma política y el ajuste económico. El nuevo presidente estuvo acompañado por ocho Jefes de Estado y por el Príncipe de Asturias.

En el mes de septiembre, y con participación del embajador español Yago Pico de Coaña, continuaron las conversaciones entre el ELN y la Comisión Nacional de Paz, reunidos en el municipio colombiano de San Francisco, anunciándose que iniciarían una ambiciosa Convención Nacional el 13 de febrero de 1999, en la que se discutirían varios grandes temas, como Derechos Humanos, Fuerzas Armadas, corrupción, recursos naturales, democracia, economía, agricultura y narcotráfico. Mientras tanto, el presidente Pastrana inició una amplia remodelación de la cúpula de las Fuerzas Armadas y el 13 de octubre ordenó el repliegue militar en

una amplia zona sureña y concedió el tratamiento de partido a las FARC, informando que 42.139 kilómetros cuadrados quedarían bajo el dominio de la guerrilla como “un laboratorio de paz” y aseguró que la desmilitarización estaría vigente del 7 de noviembre al 7 de febrero de 1999 “para facilitar los diálogos que puedan conducir a un proceso de paz consolidado y firme”. Pocos días más tarde, el Senado aprobaba una propuesta para que los líderes de las FARC, del EZL y del Ejército Popular de Liberación, EPL, accedieran el 16 de diciembre al órgano legislativo para que expusieran sus ideas sobre la reforma política que iba a acometer el parlamento y cuyo último fin era dar carpetazo a tantos años de guerra civil, siendo aceptada la propuesta por las tres formaciones guerrilleras.

Pero la grave situación financiera internacional ocurrida a mediados del verano afectó seriamente a la economía colombiana, siendo el nuevo presidente el primer mandatario iberoamericano en adoptar medidas para hacer frente a la crisis y decidió devaluar el 2 de septiembre el peso en un 9 por ciento, a fin de evitar la salida de divisas, que en los 12 meses anteriores superaban los 1.300 millones de dólares. El duro plan de ajuste motivó grandes y masivas jornadas de protesta a lo largo de todo el país, que ocasionaron violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La crisis ocasionará que la economía de Colombia creciese en 1998 por debajo del 3 por ciento y que incluso haya habido un repunte de la inflación.

El 26 de febrero, los Estados Unidos levantaron las sanciones, que aplicaba contra Colombia desde hacía dos años, como premio a “los esfuerzos que hace este país para combatir el tráfico de drogas”. En este marco de la lucha antidroga, Colombia está negociando con Francia la ampliación de un acuerdo para controlar desde satélites las extensiones de los cultivos, y en una visita a dicha nación, España y Holanda del director de la lucha contra el narcotráfico, a finales de abril, reconocía que los guerrilleros disponen de capacidad para derribar aviones y helicópteros. Concretamente señaló que ya habían perdido tres de los primeros y siete aeronaves de alas giratorias.

La vida política nacional de *Chile* giró durante 1998 en torno a la figura del general y senador vitalicio Augusto Pinochet. Nada más comenzar el año, el Partido Comunista de Chile interpuso una querrela contra el general, que todavía era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, por los delitos de “genocidio, secuestros seguidos de desaparición, asociación ilícita e inhumación ilegal de cadáveres”, acusación que sería admitida a trá-

mite por un juez de la Corte de Apelación de Santiago. Paralelamente, el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, partido que forma parte de la coalición de gobierno, debatía la acusación constitucional contra Pinochet, propuesta por cinco de sus diputados, dirigida a evitar que fuese designado senador vitalicio, cargo que de acuerdo con la Constitución vigente tiene derecho a ocupar por haber sido presidente de la República más de seis años. Sin embargo, el Gobierno, por boca del ministro del Interior, advirtió que no apoyaría la acusación constitucional porque era considerada "inconveniente" para esos momentos de la transición en los que se preparaba el abandono de Pinochet de la comandancia en jefe de las Fuerzas Armadas, previsto para una fecha entre el 26 de enero y el 11 de marzo. Frente a dicha acusación, el Gobierno propuso un referéndum para reformar la Constitución y acabar con la figura de los senadores vitalicios y designados.

Como respuesta a los incidentes habidos en la Cámara de Diputados a mediados de enero, que impidieron debatir la acusación constitucional, el general aplazó su retiro hasta la fecha límite establecida del 11 de marzo. Este retraso motivaría la dimisión del ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, presentada el 16 de enero. Pérez Yoma, que fue el hombre encargado a lo largo de la transición de actuar de puente entre las autoridades civiles y las Fuerzas Armadas, fue sustituido por Raúl Troncoso Castillo, quien declaró a los pocos días de su toma de posesión que Pinochet había hecho mucho por el país y lo calificó de defensor de la democracia. Por las mismas fechas, la Corte Suprema de Chile rechazó el exhorto del juez español García-Castellón por el que solicitaba antecedentes sobre la supuesta violación de los derechos humanos de ciudadanos españoles ocurrida durante el régimen del general Pinochet. El 2 de febrero, el presidente chileno, Eduardo Frei, inició una visita oficial a España, durante la cual criticó las indagaciones de la justicia española y pidió se respetase la transición democrática que estaba viviendo su país. En esos mismos días, el ministro chileno de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, manifestó que el escaño del anciano militar como senador vitalicio, tras su pase a retiro, era un "precio razonable a pagar" por la transición a la democracia.

El 8 de marzo, las Fuerzas Armadas declararon "comandante en jefe benemérito" a Pinochet, por su "trayectoria y labor cumplida" y para testimoniar "el impercedero reconocimiento a su gestión". Tres días más tarde el general juró su cargo de senador vitalicio en un acto precedido por numerosos incidentes en la Cámara Alta y que al mismo tiempo se repe-

tían en la de los Diputados. Por su parte, el Parlamento Europeo, tras una intervención del eurodiputado español de Izquierda Unida, Carlos Carnero, ratificó el rechazo del nombramiento como senador vitalicio de Augusto Pinochet. En un debate habido a principios de abril en el Parlamento chileno, sobre una nueva acusación constitucional contra el general, el presidente de la nación Eduardo Frei aseguró que "Augusto Pinochet no fue un obstáculo para la democracia y que las Fuerzas Armadas respetaron en todo momento la ley y el poder político legítimamente establecido".

Pero la tranquilidad de la vida chilena durante el paréntesis veraniego se vería gravemente sacudida por la decisión del juez español Baltasar Garzón de solicitar al Gobierno británico que se "garantizara la permanencia en suelo británico" del general Pinochet hasta que le pudiera tomar declaración, y que motivó el 17 de octubre su detención en un hospital de Londres, donde se recuperaba de una intervención quirúrgica. Garzón le acusaba de genocidio, terrorismo y torturas. El Tribunal Supremo de Londres sentenció la inmunidad soberana del senador vitalicio e invalidaba las órdenes de detención que pesaban contra él, lo cual fue recurrido por la Fiscalía en nombre del juez español. El 25 de noviembre, la comisión de apelación de la Cámara de los Lores británica rechazaba la inmunidad de Augusto Pinochet en una decisión histórica, que abría paso a su posible enjuiciamiento. Ello abrió una grave crisis política en Chile por lo que el presidente Frei inmediatamente convocó al Consejo de Seguridad Nacional y se dirigió por radio y televisión al país solicitando un comportamiento responsable y sereno a las instituciones y la ciudadanía. Seguidamente, la institución militar, que como es sabido mantiene significativa influencia en la vida de la nación, emitió un duro comunicado urgiendo al Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias que permitieran al antiguo comandante en jefe su regreso a Chile. Al parecer, en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, los mandos militares exigieron al Gobierno la inmediata ruptura de relaciones diplomáticas con España y Gran Bretaña. El general Ricardo Izurieta, jefe del Ejército, convocó a 2.000 oficiales en Santiago a una reunión informativa para analizar la situación.

En el orden económico, el primero de junio Chile y la Unión Europea formalizaron la incorporación del diálogo político al Acuerdo Marco de Cooperación, suscrito en junio de 1996 y cuyo objetivo final es establecer una asociación política y económica. Más tarde, el 22 de julio, la Comisión Europea aprobó el mandato de creación de una zona de libre cambio con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay) y con Chile. La caída de los precios de las materias primas, como consecuencia de la crisis finan-

ciera internacional, hicieron disminuir las exportaciones de cobre chilenas, lo que obligaría a reducir el gasto público en 700 millones de dólares a mediados del verano, a fin de evitar un repunte de la inflación, que estaba siendo inferior en tres puntos respecto a 1997. Con relación a la adquisición de nuevos sistemas de armas, a principios de año la Fuerza Aérea ordenó la compra de 12 helicópteros UH-60 Blackhawk, mientras que suspendía la adquisición de modernos aviones de combate.

En *Ecuador*, las Fuerzas Armadas se han tenido que enfrentar a las presiones del sector privado, que pretenden desaparezcan sus privilegios de competir en el campo empresarial, con inversiones que incluyen hoteles, industria textil, agricultura, metalurgia, explosivos, granjas marinas de marisco, etc. así como percibir una parte sustancial de los beneficios de las exportaciones del petróleo. Los militares argumentan que ello permite ayudar a los presupuestos de defensa y que constituyen la institución mejor valorada de todo el país, así como mantener una amplia serie de programas sociales, enseñanza agrícola a los indígenas, electrificación rural y educación pública entre otros. Ecuador es uno de los pocos países iberoamericanos que viene incrementando su presupuesto de defensa, con toda seguridad motivado por el conflicto que mantenía con Perú y por la necesidad de controlar su frontera con Colombia para evitar la penetración de la guerrilla y de los narcotraficantes, pues además sus oleoductos se encuentran próximos a dicha zona.

El primero de marzo, el Tribunal Supremo Electoral convocó elecciones generales y presidenciales en medio de un clima enrarecido debido a los daños causados por el fenómeno climatológico "El Niño", que había devastado la región costera, y al enfrentamiento entre el presidente Fabián Alarcón y la Asamblea Nacional, al prorrogar ésta las fechas para reformar la Constitución. Las elecciones, que se celebraron el 31 de marzo, dieron el triunfo al Partido Social Cristiano, pasando a la segunda vuelta para las presidenciales el alcalde de Quito, Jamil Mahuad y el banquero populista Alvaro Noboa. El 12 de julio se impuso por un estrecho margen Jamil Mahuad, 51.16 por ciento frente al 48.83 de su adversario, y asumió la Presidencia, manifestando que sus prioridades serían la recuperación económica y la solución del conflicto con Perú. Las medidas de ajuste de la primera se vieron contestadas por una huelga general a primeros de octubre que motivó caos y violencia en varias ciudades, en particular Guayaquil, mientras que las largas negociaciones con Perú culminarían con el acuerdo de paz que se suscribió en Brasilia el 26 de octubre.

Los comienzos de 1998 en *México*, y prácticamente todo el año, han estado marcados por la honda conmoción nacional a consecuencia de la matanza de Acteal a finales de diciembre del año anterior. En enero, el recién nombrado Secretario de Gobernación (Ministro del Interior), Francisco Labastida Ochoa, efectuó una amplia remodelación de su departamento, que incluyó el cese del coordinador gubernamental en las conversaciones de paz de Chiapas y su sustitución por Emilio Rabasa. Al mismo tiempo, presionado por el deterioro progresivo de la situación, el nuevo gobernador del estado chiapaneco, Roberto Albores, solicitaba el apoyo del Ejército para reformar los cuerpos de policía y achacaba a intereses extranjeros todos los problemas registrados en la región. En esta misma línea, el Subsecretario de Gobernación, Fernando Solís, acusaba a los centenares de extranjeros llegados a Chiapas meses antes, (la mayor parte miembros de numerosas ONG,s) de "participar en manifestaciones, adoctrinamiento político e incitar a la rebelión", por lo que en la segunda quincena de abril se inició la expulsión de esos ciudadanos extranjeros, entre ellos varios españoles, que trabajaban como observadores de derechos humanos y a los que se acusaba de turismo revolucionario. Casi simultáneamente, diversos medios gubernamentales acusaban al obispo de Chiapas, Samuel Ruiz, de estar vinculado al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, lo que motivó la protesta de la jerarquía católica mexicana y los cuatro obispos de Chiapas advertían al Secretario de Gobernación, Labastida Ochoa, que México estaba en una dramática encrucijada, en la que "o bien se camina a la democracia o se dirige a la dictadura, la represión o la guerra".

La presencia creciente de unidades del Ejército en el estado sureño fue rechazada por el Episcopado mexicano, cuyo vicepresidente, el obispo José Guadalupe, pidió al Gobierno "la retirada del Ejército de las comunidades indígenas para evitar que pudiera provocar rechazo y un consiguiente aumento de la violencia". En este sentido, el EZLN amenazó con el empleo de las armas si se producían nuevos ataques de grupos paramilitares y rechazaba la presencia cada vez mayor de fuerzas militares y a su vez el Consejo Nacional Indígena reiteraba sus denuncias sobre que "las comunidades indias de México vivían en un ambiente de terror y exigimos al Ejecutivo que asuma íntegramente los Acuerdos de San Andrés Larrainzar sobre Cultura y Derechos indígenas, suscritos entre el Gobierno y el EZLN en 1996". Por otro lado, los medios de comunicación pedían el desmantelamiento de las estructuras regionales del poder político, que fueron calificadas de "criminales", para poder pacificar la región. Para evi-

tar el agravamiento de la situación, el Gobierno presentó el 17 de marzo un plan de paz, invitando al líder del EZLN, subcomandante Marcos, a retomar las conversaciones, quien respondió que el Ejecutivo debía aceptar la proposición de ley de la Comisión de Concordia y Pacificación para Chiapas, COCOPA, basada en los mencionados Acuerdos de San Andrés. La propuesta gubernamental supone reformar siete artículos de la Constitución: reconocer que las comunidades indígenas pueden decidir de manera autónoma su organización social, económica, política y cultural; se garantiza su identidad cultural; se facilita la transmisión de su lengua por medios de comunicación propios; impartir justicia con su propia normativa; derecho de los indígenas para ser asistidos en juicios por intérpretes y abogados en su idioma; derecho a utilizar los recursos naturales de sus tierras; proteger el desarrollo de sus comunidades e impulsar una municipalización, teniendo en cuenta la ubicación geográfica indígena.

Con motivo de su visita a Chiapas a mediados de marzo como embajadora de la UNESCO, la premio Nóbel de la Paz Rigoberta Menchú manifestó que la tensión en la zona era manifiesta y que la fuerte presencia militar podría desencadenar choques violentos. Señalaba que las condiciones de pobreza y marginación de los indígenas de Chiapas se habían agravado en los últimos años y advertía que la incomunicación era total entre los actores principales, Gobierno, EZLN y COCOPA. La premio Nóbel consideraba que el peligro más grande estaba en la existencia y actuación impune de grupos armados vinculados a políticos locales y a caciques, y veía con gran preocupación el creciente número de tales grupos, por lo que para que pudiera fructificar cualquier esfuerzo de reconciliación era indispensable la desarticulación de los mismos. Igualmente Rigoberta Menchú aconsejaba que se consultara y tuviese en cuenta la opinión de las comunidades indígenas en toda iniciativa política que les afectase.

Dentro de una gira por Iberoamérica, en una visita de dos días iniciada el 21 de julio a México, el secretario general de la ONU, Kofi Annan exhortó al EZLN y al Gobierno del presidente Ernesto Zedillo para que establecieran un diálogo "sincero, honesto y continuado que conduzca a la paz" y destacó el papel de la sociedad mexicana que "debería compartir la responsabilidad de motivar a las partes para que negocien con seriedad y no incentiven el uso de la violencia". Annan señaló que el papel de la ONU será el de alentar un proceso de paz y reiteró que la ONU no mediaría en el conflicto, a no ser que lo solicitara el Gobierno mexicano.

En una encuesta hecha pública el 18 de agosto, realizada por la fundación Rosenblueth, el 70 por ciento de los mexicanos consideraba al Gobierno, a las autoridades de Chiapas y a grupos paramilitares próximos al PRI de ser los responsables de los crímenes de Acteal del pasado diciembre. El 73 por ciento justificaba el levantamiento indígena de 1994 y consideraba que el conflicto tenía repercusiones a nivel nacional, negando un 53 por ciento que el gobierno tuviera voluntad política de avanzar en una solución y que no se hubieran cumplido los acuerdos de San Andrés. Respecto a si el EZLN es un peligro para la paz, las opiniones se dividían en posturas contrarias, con un 40 por ciento aproximadamente por cada lado.

La oposición criticó duramente al presidente Zedillo que no mencionase el conflicto de Chiapas en su cuarto informe sobre el estado de la nación, hecho público a principios de septiembre, y de ocultar a la opinión pública la verdadera situación en esa zona. Mientras, un expediente llamado "la legalidad de la injusticia", publicado por la fundación Fray Bartolomé de las Casas, señalaba que desde la matanza de Acteal habían sido asesinadas en Chiapas 57 personas. El 14 de septiembre, diez obispos integrantes de la Comisión de la Paz y Reconciliación de la Conferencia Episcopal mexicana llegaron a Chiapas para completar la información facilitada por las fuentes gubernamentales, como parte de la preparación de la visita de SS Juan Pablo II a México, prevista para el 22 de enero de 1999.

La caída de los precios del petróleo obligó al gobierno de Zedillo a realizar varios recortes presupuestarios y además provocará una reducción adicional de los ingresos previstos superior a los 1.500 millones de dólares. A diferencia de 1986, cuando la economía mexicana dependía en un 75 por ciento de los ingresos del petróleo, ahora el crudo tan sólo representa el 37 por ciento, porcentaje aún elevado que podría audizar el grave déficit fiscal existente. Además, la crisis económica internacional acaecida en agosto, supuso otro factor de riesgo para México, que obligó a un alza de los tipos de interés que a final del verano estaban en torno a los 27 puntos. Todo ello se tradujo en una desaceleración del crecimiento que se teme sea por debajo del 4 por ciento, muy inferior del 7.1 del año precedente. Sin embargo, en el cuarto informe del Gobierno, antes citado, Zedillo defendió su política fiscal ante la caída de los precios del crudo, la crisis ruso-asiática y la depreciación del 20 por ciento del peso frente al dólar y denunció a los "criminales de cuello blanco" como responsables de la corrupción (entre los acusados está el gobernador del Banco Central de México, quien fue denunciado por el diario Reforma de un presunto des-

falco). El Fondo Monetario Internacional espera que México efectúe una reforma bancaria, ajuste la política monetaria y diversifique los ingresos de manera que contenga la desaceleración del crecimiento económico y la devaluación del peso, que en octubre alcanzó una pérdida del 32 por ciento respecto al dólar.

Nuevamente el narcotráfico ha tenido un triste protagonismo en la vida mexicana. La Fiscalía antidroga admitió que en el 20 por ciento de los 2.418 municipios del país se registran actividades relacionadas con el narcotráfico e informó que durante 1997 se localizaron y destruyeron 770 pistas de aterrizaje clandestinas, se erradicaron 41.000 hectáreas de cultivo de marihuana y amapola y se detuvieron 11.000 personas relacionadas con este negocio criminal. Por otro lado la Procuraduría General de la República arrestó al ex-director de la policía judicial federal, a quien acusó de estar vinculado al narcotráfico y de otros presuntos delitos durante su ejercicio en el cargo (1993-95). En lo que se refiere a la criminalidad urbana, millares de mexicanos se manifestaron contra la violencia, pues según algunos medios de comunicación se producen 694 delitos diarios solamente en la capital federal, estimándose que en 1998 en México DF se registrará un millón y medio de delitos, que dejará 1.100.000 víctimas. En la lucha contra el crimen organizado se detuvo a Daniel Arizmendi, quien lideraba una poderosa mafia autora de más de 200 secuestros, entre los que ha habido varios españoles, y a los que mutilaba las orejas para presionar a los familiares de las víctimas en el pago del rescate.

Es evidente que las Fuerzas Armadas mexicanas vienen desempeñando un mayor papel en las relaciones de poder en México y, a diferencia del resto de los países iberoamericanos, están incrementando el presupuesto de defensa y están efectuando cometidos dentro del orden interno de la nación. Este nuevo papel ha deteriorado su imagen e introducido nuevos elementos de tensión con los cuerpos policiales y con la ciudadanía. La detención del general Gutiérrez Rebollo en 1997, máximo responsable de la lucha antidroga por su vinculación con el narcotráfico, y que fue condenado el 3 de marzo de 1998 a 13 años y 9 meses de prisión, la impopular actuación del Ejército en Chiapas y la detención y condena a 14 años del general Gallardo Rodríguez por malversación y destrucción de archivos propiedad de las Fuerzas Armadas está afectando muy negativamente a la imagen de las mismas, lo que ha llevado al presidente Zedillo a adoptar medidas que alejen a los militares de los riesgos de verse mezclados en la corrupción y a restablecer su honorabilidad, dejando que sea

la Procuraduría General de la República la responsable de hacer frente al crimen organizado, a la corrupción y al narcotráfico.

La vida política de *Paraguay* estuvo marcada durante 1998 por el triunfo del Partido Colorado en las elecciones presidenciales y el "affaire" del general Lino César Oviedo, que había sido procesado por un intento de golpe de estado en 1996 y que, a la espera de que un Tribunal Militar Extraordinario dictase sentencia, se encontraba en prisión desde el 2 de diciembre del pasado año por orden del presidente Juan Carlos Wasmosy. El general, que había ganado los comicios internos del Partido Colorado, ANR, para elegir candidato a la Presidencia, fue condenado a diez años de cárcel por el Tribunal el 9 de marzo por un delito "contra el orden y la seguridad de las Fuerzas Armadas", sentencia que confirmaría la Corte Suprema un mes más tarde. La condena motivaría que el Tribunal Superior de Justicia Electoral inhabilitara al general Oviedo para presentarse a las elecciones que tuvieron lugar el 10 de mayo. De esta forma se cerraba una crisis política y militar que podía haber dado al traste con la transición política a la democracia pues, como afirmaría el escritor paraguayo Arturo Roa Bastos, ésta aún no había llegado a su patria, "un país que sigue siendo una isla rodeada de tierra".

Las elecciones presidenciales serían ganadas con un 54 por ciento de los votos por el candidato oficialista del ANR, Raúl Cubas, frente al 43 por ciento del aspirante de la opositora Alianza Democrática, Domingo Laíno. Las elecciones llevaban consigo los escaños que ocuparían 45 senadores, 80 diputados y 17 gobiernos de los departamentos que conforman el país, y a la cita electoral acudió el 80 por ciento del censo. La toma de posesión del nuevo presidente Raúl Cubas tuvo lugar el 15 de agosto y asistieron a la ceremonia de investidura el Príncipe de Asturias y siete jefes de Estado. Pero el martes 18 de agosto, Cubas conmutó la sentencia de diez años de prisión de su amigo y correligionario, el general Oviedo, por tres meses de prisión, que por llevar cumplidos ocho originó su puesta en libertad. La decisión presidencial sería reprobada por el Congreso, lo que abrió el camino hacia el juicio político contra el presidente, tentativa fallida, pues no alcanzaría el 60 por ciento de los votos necesarios y fue acompañada por el silencio de la clase militar. La iniciativa presidencial llevaría consigo una depuración en las Fuerzas Armadas.

En el aspecto económico ha habido unos resultados aceptables con la disminución de la deuda y la inflación, siendo reducido también el presupuesto de defensa en un diez por ciento para bajar a los 110 millones de

dólares, aunque la oposición acusara al Gobierno de que la corrupción supuso una pérdida al país de 2.000 millones de dólares.

Aunque el fenómeno “El Niño” castigó algunas zonas del *Perú* poco después de comenzar el año, un acuerdo con Ecuador estableciendo un calendario dirigido a la firma de un tratado de paz entre ambos países vino a compensar de alguna forma los daños causados por las inundaciones. Las fuerzas de seguridad se apuntarían un gran éxito cuando el 22 de abril fue detenido Pedro Quinteros, líder histórico y miembro del Buró Político y del Comité Central de Sendero Luminoso. Sin embargo, la dimisión a principios de junio del presidente del Gobierno, Alberto Pandolfi, contribuyó a incrementar el ambiente de crisis precisamente cuando se estaba negociando intensamente con Ecuador el acuerdo de paz, por lo que Alberto Fujimori designó en 24 horas un nuevo jefe del Ejecutivo, Javier Valle Riestra, un reconocido crítico del primer mandatario y enemigo de su reelección como presidente del país. El nuevo primer ministro advirtió en su primera comparecencia pública que pretendía “fortalecer la democracia y el respeto a los derechos humanos”, declarándose enemigo de todas las reelecciones, por lo que aseguró que su Gobierno sometería a consulta la candidatura para una segunda reelección de Fujimori en el año 2000. Pero a primeros de agosto Valle Riestra presentaría su dimisión justificándola porque sus esfuerzos para democratizar el país no eran viables, siendo sustituido por Alberto Pandolfi, quien dos meses antes había renunciado al cargo.

La destitución del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y comandante general del Ejército, general Hermoza, efectuada el 20 de agosto produjo un grave malestar entre los militares que habían depositado su confianza en el general que desempeñaba sus cargos desde hacía siete años. Le sustituyó el ministro de Defensa, general César Saucedo. Pocos días después, el 27 de agosto, el Congreso peruano se pronunció en contra de la celebración de un referéndum para determinar si el presidente Alberto Fujimori podía presentarse a un tercer mandato, con lo que se dejaba el camino libre para una nueva reelección. La oposición sólo había conseguido 45 votos de los 48 requeridos para derogar la ley que permite la reelección del presidente, si bien la convocatoria del referéndum había sido apoyada por el 73 por ciento de los ciudadanos. Fujimori encontró el apoyo de los Estados Unidos por su participación en la lucha contra el narcotráfico, que le ha facilitado modernos radares para detectar y controlar los aviones que transportan la droga, con lo que la Fuerza Aérea ha podido causar algunos derribos y debilitar

el "puente aéreo" con Colombia, disminuyendo así en cerca del 30 por ciento la producción de coca al caer los precios en el mercado de la droga.

En *Uruguay* el año comenzaba con la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores. En febrero la Cámara de Senadores, en sesión plenaria, se solidarizó con el pueblo español condenando los últimos crímenes de ETA. A mediados de mayo se celebró en Montevideo la IX Conferencia de Presidentes de Parlamentos Democráticos Iberoamericanos, a la que asistió por vez primera Cuba como miembro de pleno derecho, estando España representada por el presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo. El 18 de julio, un juez uruguayo negó a su colega español Baltasar Garzón la comisión rogatoria para interrogar a un oficial, retirado en 1971, sobre desapariciones de ciudadanos españoles en Argentina. En el área económica, la Comisión Europea aprobó en julio abrir negociaciones con los cuatro miembros de Mercosur para la creación de una zona de libre cambio, debiendo destacarse la fuerte disminución de la inflación que pasó del 19.8 por ciento al 10.2.

En *Venezuela* es donde el impacto de los factores económicos internacionales ha causado los efectos más dramáticos, porque además repercutieron muy fuertemente los precios del petróleo, que en el verano de 1998 cayeron por debajo de los 12 dólares por barril, muy lejos de los 21 fijados como meta por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, a la que pertenece dicha nación. El petróleo es el principal producto de exportación de Venezuela y con la bajada del precio reducirá en más de 7.000 millones de dólares los ingresos nacionales en 1998. A pesar de los intentos más o menos coordinados de los países de la OPEP, y de otros no pertenecientes a la Organización, para reducir su producción con vistas a conseguir un alza del precio del crudo, el caso es que se situaron en su nivel más bajo desde hace diez años. Ante esta situación, el 18 de agosto los ministros de energía venezolano y mexicano coincidieron en rechazar nuevos recortes en la producción de petróleo, que había sido ya reducida en 525.000 barriles por día en Venezuela y 200.000 en México. Para evitar una macrodevaluación del bolívar, el gobierno venezolano permitió a finales de agosto una mayor fluctuación de su moneda dentro de las bandas cambiarias, que en realidad representaba una devaluación de facto. Y el deterioro de la economía ha hecho que haya sido el único país iberoamericano con crecimiento negativo y con un repunte del IPC que se situó en el 37 por ciento. El 14 de septiembre el Fondo de Garantías de Depósitos informó que los tipos de interés rondaban el 100 por cien, que

desde 1984 el bolívar se había devaluado en un 14.000 por cien y que en estos 14 años la inflación había subido un 89.000 por ciento.

En el campo político, un tribunal ordenó el 14 de abril el arresto inmediato del ex-presidente Carlos Andrés Pérez, acusado de enriquecimiento ilícito, estableciendo su residencia en Caracas como lugar de reclusión, pues al rebasar los 70 años no podía ingresar en un centro penitenciario. Pero más importantes fueron las elecciones regionales y legislativas celebradas el 8 de noviembre, pues se consideraban esenciales para las presidenciales que tendrían lugar el 6 de diciembre. El triunfo lo alcanzó el ex teniente coronel Hugo Chávez, protagonista de la intentona golpista del 4 de febrero de 1992, apoyado por una coalición llamada Polo Patriótico, compuesta por el Movimiento Quinta República, que es su partido, por los socialistas, sector nacionalista y los comunistas, mientras que los partidos tradicionales recibieron un voto de castigo, lo que parece una muestra de la voluntad de los venezolanos por el cambio.

En el plano internacional, la Organización de Estados Americanos reunida en Caracas ratificó el primero de junio su compromiso de compartir un "destino común" en favor del fortalecimiento de la democracia en el continente, al inaugurar su XXVIII Asamblea General.

ESPAÑA EN IBEROAMÉRICA

La presencia española en Iberoamérica ha sido continua y creciente, tanto en el ámbito político como en el económico. El 15 de marzo, el presidente del Gobierno español iniciaba su sexto viaje a la región, antes de que se cumpliera su segundo año al frente del ejecutivo. En esta ocasión, la gira comprendía una visita a tres países, Bolivia, Uruguay y Chile, por este orden, y durante una semana. Fue un nuevo paso para reforzar la presencia cultural y económica de España en el Cono Sur del continente y dos mensajes: una demanda en favor de una mayor colaboración antiterrorista y un llamamiento en pro de la democracia. Al llegar a la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, José María Aznar declaró que "lo importante es que ahora, con nuestras raíces, con nuestro pasado, seamos capaces de construir juntos un futuro". Durante su visita se suscribieron acuerdos por un total de 130 millones de dólares, que implican la canalización de recursos hacia el alivio de la deuda y los programas de impulso a la pequeña y mediana empresa. Entre los acuerdos destaca uno para fortalecer el Sistema de Defensa Civil Boliviano, centrado en combatir los efectos del fenó-

meno meteorológico de El Niño, otro para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y propiciar cultivos alternativos a la coca en la región de Chapare y otro para favorecer el desarrollo de los pueblos indígenas. Precisamente en la sede del Foro Indígena (institución creada en la Cumbre Iberoamericana de Madrid en 1992) reclamó a todos los países del Cono Sur el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y pidió para ellos el lugar que les corresponde en los parlamentos nacionales.

En Uruguay, su segundo destino en este viaje, centró su mensaje en la lucha contra el terrorismo, toda vez que en este país residen 13 integrantes de la banda ETA. España había ya alcanzado ciertos éxitos en ese terreno en esta nación, como fueron que el Senado suscribiese una declaración de condena del terrorismo y fuera el primer país en el que las autoridades hicieran público el vídeo elaborado por el Ministerio del Interior español para mostrar al mundo la verdadera cara de ETA.

Nada más pisar tierra chilena, José María Aznar instó a la Cámara de los Diputados, reunida en sesión plenaria en la ciudad de Valparaíso, a “diluir cualquier residuo autoritario” y a ejercitar día a día “el espíritu de concordia” y los principios del Estado de Derecho. En el segundo día de la visita lanzó un mensaje novedoso en su intervención ante el Parlamento, crear un espacio jurídico común iberoamericano, similar al que distintos gobiernos españoles han propuesto para Europa. Los diputados chilenos aclamaron al presidente cuando agradeció la cariñosa acogida a exiliados y emigrantes españoles “en épocas difíciles”. Ambos gobiernos asumieron un acuerdo tácito en virtud del cual España no haría ningún gesto que pudiera interferir el proceso chileno de tránsito a la democracia y Chile no efectuaría reclamaciones al presidente español por la actuación de la justicia española en relación con los españoles desaparecidos. José María Aznar, que fue acompañado en esta gira por un nutrido grupo de empresarios, llevaba también unos objetivos económicos, puesto que España es el primer inversor extranjero en Chile, país que cuenta con un tratado muy favorable de cooperación con la Unión Europea.

Igualmente, el viaje que el presidente de la Xunta de Galicia realizó por los países del Mercosur refleja la cooperación económica española con Iberoamérica.

Durante el mes de mayo, reanudó su visita a España el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, iniciada en el mes de abril, pero que tuvo que ser interrumpida el 22 de dicho mes por la muerte de uno de sus más estrechos colaboradores. Cardoso vino acompañado por varios minis-

tros y un grupo de hombres de negocio a fin de estrechar unas relaciones económicas que han crecido de forma espectacular en los últimos años.

La Casa Real española, que presta una especial atención a Iberoamérica, estuvo representada por el Príncipe de Asturias en las tomas de posesión de cinco nuevos presidentes: a finales de enero y el 8 de mayo, a los de Honduras y Costa Rica, respectivamente, y más tarde, interrumpiendo sus vacaciones de agosto, el Príncipe viajó a Colombia para asistir a la investidura de Andrés Pastrana como primer mandatario del país; posteriormente viajaría a Ecuador, donde tomó posesión Jamil Mahuad, para a continuación trasladarse a Paraguay y representar a España en el acto de investidura de Raúl Cubas. Igualmente viajaría a Venezuela para asistir al V Centenario de la Llegada de Cristóbal Colón al continente americano.

A mediados del mes de septiembre el presidente Aznar efectuó su séptimo viaje a los países iberoamericanos, en este caso a Colombia y Perú. Nada más llegar a Cartagena de Indias, ofreció la mediación española en el proceso de paz que pretendía relanzar el recientemente elegido presidente de la República colombiana Andrés Pastrana, que incluía gestiones arbitrales de la diplomacia española y Madrid como sede neutral para las negociaciones con los grupos guerrilleros, en particular las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Conviene recordar que en Colombia se producen 30.000 homicidios de promedio cada año y la violencia ha obligado al desplazamiento y emigración de 150.000 personas. Aznar firmó varios convenios de cooperación bilateral y un programa de ayuda financiera, pero recordó garantías de respeto para los derechos humanos, si bien no puso condiciones a la ayuda española. Antes de trasladarse a Lima, el presidente español visitó la localidad amazónica de Iquitos, donde desarrolla una intensa actividad la cooperación española. Con Alberto Fujimori firmó un convenio por el que se establecen contactos anuales de alto nivel, con lo que el Gobierno español "llenaba el vacío" existente desde hacía seis años. Por otra parte, el aumento de la inversión española en Perú justificaba, en opinión de José María Aznar, el que se preste a esta nación apoyo político. Días después, la esposa del presidente español asistió como invitada especial a la I Conferencia de primeras damas de las Américas, que se celebró en Santiago de Chile, y que la inauguró con una conferencia sobre las reclusas, sector de la población que "sufre una dolorosa marginación".

Después de la Cumbre Iberoamericana de Oporto, se reunieron en la ciudad gallega de Bayona el 19 de octubre los dirigentes iberoamericanos

en el poder pertenecientes a la Internacional Demócrata Cristiana, IDC, que firmaron la Declaración de Bayona, por la que se comprometieron a rechazar toda forma de corrupción y cualquier tentación totalitaria o autoritaria, abogando por los valores universales del Humanismo Cristiano como fundamento para consolidar la democracia. En este encuentro participaron, además del presidente del Gobierno español, los Jefes de Estado de Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile y Ecuador y el presidente del Partido Popular Europeo, Wilfried Martens. Simultáneamente, se celebraba en la ciudad española de Córdoba la III Reunión de Ministros de la Presidencia Iberoamérica, que fue inaugurada por el vicepresidente primero español Alvarez-Cascos, con el fin de dar respuestas globales a los problemas comunes. Mientras tanto, Fidel Castro realizaba una visita a Extremadura, para trasladarse a Madrid el 20 de octubre, donde celebraría varias entrevistas con José María Aznar.

Sin embargo, un incidente vino a empañar este año de gran impulso a las relaciones con Iberoamérica: la petición del juez Baltasar Garzón para enjuiciar al general Augusto Pinochet, a la que nos referimos al abordar al VIII Cumbre Iberoamericana. A pesar de los esfuerzos personales del presidente Frei y de José María Aznar para reducir la crisis a límites estrictamente jurídicos, la repercusión en las relaciones entre los dos países fue indudable, hasta el punto que el Gobierno chileno retiró a su embajador en Madrid y violentas manifestaciones alteraron la vida chilena, en las que banderas españolas fueron quemadas y nuestra residencia diplomática en Santiago objeto de demostraciones protestando por la decisión del Ejecutivo español de tramitar la solicitud de extradición a las autoridades británicas. Conviene tener en cuenta la gran presencia económica en Chile, donde la inversión pública y privada supera el billón de pesetas.

La política económica española en Iberoamérica ha continuado con una creciente inversión en 1998, hasta el punto que se superó el billón de pesetas que se había alcanzado en 1997.

Las inversiones españolas en *Argentina* ascienden ya a unos 400.000 mil millones de pesetas, si se tienen en cuenta negocios en forma asociativa esa cifra supera los 900.000 millones. Las principales operaciones en este país las han realizado Telefónica, Repsol, Endesa-Enher, Aguas de Barcelona y Campofrío, y entre los bancos más activos se encuentran el Santander, BBV, Español de Crédito y el Central-Hispano.

En *Brasil* destaca Telefónica, que en 1998 invirtió casi un billón de pesetas en la compra de Telesp y Tele Sudeste Celular. Y en cuanto a los

bancos, el Grupo Santander tiene una importante presencia, así como el BBV, que se ha consolidado en Brasil con la adquisición este año del Banco Excel.

El sector bancario español tiene también una fuerte presencia en Chile, donde el Grupo Santander ha conseguido en 1998 una cuota de mercado del 11.3 por ciento, y la inversión del Central-Hispano supera los 70.000 millones de pesetas y controla los dos principales bancos del país. Igualmente, Telefónica y BBV tienen una muy alta inversión, donde poseen alrededor del 45 por ciento de Telecomunicaciones de Chile y Banco Hipotecario de Fomento respectivamente, mientras Endesa es el primer accionista de Enersis, la mayor empresa de electricidad chilena.

México es otro gran centro de inversiones españolas, donde en 1998 se ha reforzado la actividad del Santander, Bilbao-Vizcaya y Central-Hispano, así como de Telefónica, Dragados, FCC, Entrecanales y Cubiertas, la sevillana Abengoa y la cadena hotelera Ríu.

En *Venezuela*, las inversiones han continuado principalmente por parte del BBV, Grupo Santander, Central-Hispano y Telefónica.

Cuba es otro de los focos para la economía española, habiéndose situado en primer lugar como país inversor, siendo el sector turístico el más importante, tanto en hoteles como con grupos de viaje. Además en los sectores de alimentación, construcción, tabaco y plásticos y en otros campos de la actividad económica, la presencia española ha proseguido durante 1998 con un índice creciente.

Pero el número de empresas españolas que está invirtiendo en Iberoamérica, así como el de naciones, va en aumento. Por ejemplo, el banco Bilbao-Vizcaya ha ampliado su presencia a *Colombia*, *Perú* y *Uruguay* y el Central-Hispano a *Bolivia*. Por su parte, Repsol ha realizado unas inversiones, con sus filiales, superiores a los 600.000 millones de pesetas y dispone de estaciones de servicio en *Argentina*, *Perú* y *Ecuador* y distribuye gas a *Bogotá*, *Buenos Aires*, *Monterrey* y *México capital*. La compañía Telefónica firmó un contrato con el Gobierno peruano en agosto de 1998 para poner fin al monopolio de las telecomunicaciones en el país, donde su inversión superaba los 300.000 millones de pesetas y ha comenzado una nueva inversión por un valor de 225.000 millones hasta el año 2001. El Grupo Prosegur, que ya tenía presencia en *Argentina*, *Chile*, y *Panamá*, ha efectuado su entrada en *Brasil*, *México* y *Venezuela*, y la empresa carrocera Irizar ha comenzado a producir autocares en Brasil en una "joint

venture” con la compañía local Gaio. Podemos resumir diciendo que España ocupa ya el primer puesto en Iberoamérica, no sólo por las grandes compañías y entidades financieras, sino también por las pequeñas y medianas empresas, habiendo cambiado la preferencia que había hacia otras naciones de la Unión Europea por los países iberoamericanos, aunque los créditos concedidos por el Instituto de Crédito Oficial a nuestras empresas para invertir en Iberoamérica para 1998 no hayan experimentado un crecimiento significativo, 80.000 millones de pesetas, 2.500 millones más que en el año anterior.

En un gesto de espontánea solidaridad, la población española acudió en auxilio de los cuatro países centroamericanos, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, dramáticamente afectados por el huracán Mitch. A mediados de noviembre los ciudadanos españoles habían aportado más de 15.000 millones de pesetas, en tanto que el Gobierno había concedido 18.000 millones de pesetas en créditos FAD y condonado otros 8.500 millones de pesetas de deuda hasta el año 2001. El Príncipe de Asturias, acompañado del Vicepresidente Primero del Gobierno, Álvarez Cascos, viajó a la zona entre el 14 y 18 de noviembre. Además, unidades terrestres, navales y aéreas de las fuerzas armadas españolas fueron desplazadas a la zona en misión humanitaria.